CORTES GENERALES

DIARIO DE SESIONES DEL

SENADO

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSE FEDERICO DE CARVAJAL PEREZ

Sesión Plenaria núm. 36

celebrada el martes, 16 de junio de 1987

ORDEN DEL DIA

Lectura y aprobación, si procede, del acta de las sesiones anteriores, celebradas los pasados días 19, 20 y 21 de mayo.

Preguntas:

- De don José Luis López Henares, de la Agrupación de Senadores del PL-Grupo Mixto, sobre criterios del Gobierno para la distribución de 875 millones de pesetas para inversión de carácter cultural en las corporaciones locales.
- De don Miguel Barceló Pérez, del Grupo de Coalición Popular, sobre yacimiento arqueológico en Tosall de la Cala, Benidorm (Alicante).
- De don José Alarcón Molina, del Grupo de Coalición Popular, sobre urgente convocatoria de oposiciones al Cuerpo de Veterinarios Titulares.
- De don José Alarcón Molina, del Grupo de Coalición Popular, sobre concurso de traslados para veterinarios titulares.
- De don Enrique Bolín Pérez-Argemí, del Grupo de Coalición Popular, sobre destino del edificio que se está construyendo en el término municipal de Mollina (Málaga).
- De don Miguel Barceló Pérez, del Grupo de Coalición Popular, sobre consumo y tráfico de drogas en los centros penitenciarios.
- De don José Luis de los Mozos y de los Mozos, del Grupo de Coalición Popular, sobre Palacio de los Vivero.

Interperaciones:

- De don Ramón Trías Fargas, del Grupo Convergència i Unió, sobre si tiene el Gobierno una idea clara de los gastos directos que exige la investigación, así como de las inversiones en equipo y personal auxiliar necesarios para llevar adelante la misma y, en todo caso, de qué manera piensa el Gobierno promover la investigación privada.

Delegación de competencia legislativa:

— En la Comisión de Economía y Hacienda para tramitar el proyecto de ley de tributación de la Compañía Telefónica Nacional de España.

Dictámenes de comisiones sobre proyectos y proposiciones de ley remitidos por el Congreso de los Diputados:

— De la Comisión de Constitución en relación con la proposición de ley orgánica sobre financiación de los partidos políticos.

Proposición de reforma del artículo 182 del Reglamento del Senado.

S U M A R I O

Se abre la sesión a las cinco horas y cinco.

Página

Lectura y aprobación, si procede, de las actas de las sesiones anteriores celebradas los días 19, 20 y 21 de mayo de 1987 1386

El señor Presidente manifiesta que la Presidencia dijo en la sesión del día de ayer que las actas de las sesiones anteriores y la de ayer se aprobarían hoy. Pero para dar tiempo a que la de ayer se imprima y pase a poder de los señores Portavoces con la antelación necesaria, se somete a aprobación en el día de hoy el acta correspondiente a los días 19, 20 y 21 citados.

Es aprobada por asentimiento.

Página

Preguntas 1386

Página

De don José Luis López Henares, de la Agrupación del PL-Grupo Mixto, sobre criterios del Gobierno para la distribución de 875 millones de pesetas para inversión de carácter cultural en las corporaciones locales 1386

El señor López Henares formula su pregunta. Le contesta el señor Ministro de Administraciones Públicas (Almunia Amann). El señor López Henares agradece su respuesta al señor Ministro y solicita una aclaración a la misma. El señor Ministro hace uso de la palabra para facilitar al señor López Henares la aclaración solicitada y para precisar el contenido de su respuesta a la pregunta.

Página

De don Miguel Barceló Pérez, del Grupo de Coalición Popular, sobre yacimiento arqueológico en Tosall de la Cala, Benidorm (Alicante) 1387

Formula su pregunta el señor Barceló. Le contesta el señor Ministro de Administraciones Públicas (Almunia Amann).

Replica el señor Barceló y el señor Presidente interviene para hacer notar al señor Barceló que no puede plantear cuestiones que no afectan al Gobierno.

Página

De don José Alarcón Molina, del Grupo de Coalición Popular, sobre urgente convocatoria de oposiciones al Cuerpo de Veterinarios Titulares 1388

El señor Alarcón formula su pregunta. Le contesta el señor Ministro de Administraciones Públicas (Almunia Amann). Replica el señor Alarcón y le contesta en dúplica el señor Ministro.

Página

De don José Alarcón Molina, del Grupo de Coalición Popular, sobre concurso de traslados para veterinarios titulares 1388

Formula su pregunta el señor Alarcón. Le contesta el señor Ministro de Administraciones Públicas (Almunia Amann). Replica el señor Alarcón e interviene en dúplica el señor Ministro.

Página

De don Enrique Bolín Pérez-Argemí, del Grupo Popular, sobre destino del edificio que se está construyendo en el término municipal de Mollina (Málaga) 1389

El señor Bolín formula su pregunta. Le contesta el señor Ministro de Justicia (Ledesma Bartret). El señor Bolín da las gracias al señor Ministro y el señor Ministro interviene nuevamente para precisar el sentido de su contestación.

Página

De don Miguel Barceló Pérez, del Grupo de Coalición Popular, sobre consumo y tráfico de drogas en los centros penitenciarios 1390

El señor Barceló formula su pregunta. Le contesta el señor Ministro de Justicia (Ledesma Bartret). En réplica interviene el señor Barceló, y en dúplica hace uso de la palabra el señor Ministro.

Página

De don José Luis de los Mozos y de los Mozos,

del Grupo de Coalición Popular, sobre Palacio de los Vivero	1391
<i>El señor De los Mozos formula su pregunta. Le contesta el señor Ministro de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría de Gobierno (Zapatero Gómez). El señor De los Mozos hace uso del turno de réplica y el señor Ministro del de dúplica.</i>	
	Página
Interpelaciones	1391
	Página
De don Ramón Trías i Fargas, del Grupo de Convergencia y Unión, sobre si tiene el Gobierno una idea clara de los gastos directos que exige la investigación, así como de las inversiones en equipo y personal auxiliar necesarios para llevar adelante la misma y, en todo caso, de qué manera piensa el Gobierno promover la investigación privada	1391
<i>El señor Trías i Fargas desarrolla su interpelación. Contesta en nombre del Gobierno el señor Ministro de Educación y Ciencia (Maravall Herrero). En turno de portavoces intervienen los señores Luna Aguado, de la Agrupación del PL-Grupo Mixto, Dorrego González, del Grupo Mixto, Trías i Fargas, por Convergencia y Unión, Aguirre Barañano, del Grupo Vasco y Calvo Calvo, del Grupo de Coalición Popular. El señor Ministro hace uso de la palabra para realizar algunas precisiones en relación con los datos expuestos en su intervención anterior. En nombre del Grupo Socialista interviene el señor Quintanilla Fisac.</i>	
	Página
Delegación de competencia legislativa en la Comisión de Economía y Hacienda para tramitar el proyecto de Ley de tributación de la compañía Telefónica Nacional de España ..	1401
<i>Se aprueba por asentimiento.</i>	
	Página
Dictámenes de Comisiones sobre proyectos y proposiciones de Ley remitidos por el Congreso de los Diputados	1401
	Página
De la Comisión de Constitución en relación con la proposición de Ley Orgánica sobre financiación de los partidos políticos	1401
<i>La señora Alejandre Ubeda presenta el dictamen en nombre de la Comisión. Sin turnos a favor ni en contra, se abre turno de portavoces, en el que intervienen los señores Dorrego González, del Grupo Mixto, Oliveras i Terradas, de Convergencia y Unión, De los Mozos, del Grupo de Coalición Popular y Cucó Giner, por el Grupo Socialista.</i>	
<i>Letda por el señor Secretarto 3.º (Aguilera Bermúdez), una enmienda transaccional al texto del preámbulo del dictamen de la Comisión, se aprueba éste con la enmienda tran-</i>	

saccional propuesta por 179 votos a favor, uno en contra y dos abstenciones.

Entrando en el estudio de los artículos y de las enmiendas presentadas al articulado, interviene para la defensa de la enmienda número 2 el señor Pozueta, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos. Para la defensa de la enmienda número 9 lo hace el señor Oliveras i Terradas, de Convergencia y Unión. Para turno en contra interviene el señor Cucó Giner, del Grupo Socialista. En turno de portavoces hacen uso de la palabra los señores Pozueta y Cucó.

Se rechaza la enmienda número 2, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, por 19 votos a favor, 150 en contra y cuatro abstenciones.

Se rechaza la enmienda número 9, del Grupo de Convergencia y Unión, por 19 votos a favor, 131 en contra y 25 abstenciones.

Se aprueba el artículo 1 por 168 votos a favor, tres en contra y una abstención.

Se aprueba el artículo 2 por 156 votos a favor, 18 en contra y dos abstenciones.

Comienza el examen de los artículos 3.º a 8.º con la defensa de la enmienda número 3 por parte del señor Pozueta, que incluye en su defensa asimismo el número 4. El señor Oliveras i Terradas defiende las enmiendas 9, 10 y 12. El señor Vicepresidente (Arespacochaga y Felipe) pregunta al señor Pozueta si en su intervención anterior ha defendido también la enmienda número 4, a lo que asiente el señor Pozueta. Abierto el turno en contra, hacen uso de la palabra el señor Alonso Sarmiento. Y en turno de portavoces intervienen los señores Pozueta, Oliveras i Terradas, y Alonso Sarmiento.

Efectuada la votación, se rechaza la enmienda número 3 de Senadores Nacionalistas Vascos por 19 votos a favor y 150 en contra.

Se rechaza la enmienda número 4 del mismo Grupo Parlamentario por 16 votos a favor y 138 en contra.

Se rechaza la enmienda 10 de Convergencia y Unión, por 15 votos a favor, 138 en contra y 16 abstenciones.

Se rechaza la enmienda 12, de Convergencia y Unión, por 14 votos a favor, 137 en contra y 21 abstenciones.

El señor De los Mozos defiende las enmiendas 7 y 8. El señor Alonso Sarmiento hace uso de la palabra para oponerse a las mismas. En turno de portavoces interviene la señora De Palacio y el señor Alonso Sarmiento.

Se rechaza la enmienda número 7 del Grupo de Coalición Popular, por 33 votos a favor, 136 en contra y 8 abstenciones.

Se rechaza la enmienda número 8 del mismo Grupo por 35 votos a favor, 138 en contra y nueve abstenciones.

Se aprueban los artículos 3 y 8 conforme al texto del dictamen, por 134 votos a favor, tres en contra y 36 abstenciones.

Se aprueban los artículos 4, 5, 6 y 7, por 174 votos a favor, dos en contra y cuatro abstenciones.

Se entra en la discusión del Título III, y el señor Oliveras,

de Convergencia i Unión, defiende la enmienda número 13. Para turno en contra interviene la señora Alejandre Ubeda. En turno de portavoces lo hace el señor Oliveras. La señora Alejandre interviene nuevamente.

Se rechaza la enmienda número 13 de Convergencia y Unión, por 14 votos a favor, 134 en contra y 28 abstenciones.

Se aprueba el artículo 9.º, que comprende todo el título III, por 161 votos a favor, diez en contra y tres abstenciones.

En el título IV, el señor Pozueta hace uso de la palabra para defender la enmienda número 5. El señor Oliveras defiende la enmienda 14. En turno en contra, interviene el señor Cucó. En turno de portavoces hacen uso de la palabra los señores Pozueta y Cucó.

Se rechaza la enmienda número 5 del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, por 16 votos a favor y 166 en contra.

Se rechaza la enmienda 14 de Convergencia y Unión, por 15 votos a favor, 134 en contra y 37 abstenciones.

Se aprueba el artículo 10 por 174 votos a favor, dos en contra y seis abstenciones.

Se aprueba el artículo 11 por 168 votos a favor, 13 en contra y una abstención.

El señor Pozueta hace uso de la palabra para la defensa de la enmienda número 6. En turno en contra interviene el señor Alonso Sarmiento. En turno de portavoces interviene el señor Pozueta y el señor Alonso Sarmiento.

Se rechaza la enmienda número 6 del Grupo Vasco por 14 votos a favor, 174 en contra y una abstención.

Se aprueba la disposición final, por 177 votos a favor, dos en contra y tres abstenciones.

Página

Proposición de reforma del artículo 182 del Reglamento del Senado 1415

Para la defensa de la proposición hace uso de la palabra el señor Bosque Hita, del Grupo Parlamentario de Coalición Popular. Para turno en contra interviene la señora Rubiales Torrejón, del Grupo Socialista. En turno de portavoces hacen uso de la palabra los señores Bajo Fanlo, López Henares, Ruiz de Erenchun, Trías i Fargas, Alarcón Molina y señora Rubiales.

Sometida a votación, fue rechazada la proposición por 51 votos a favor, 133 en contra y 11 abstenciones.

Se suspende la sesión a las nueve horas y cinco.

Se abre la sesión a las diecisiete horas y cinco.

LECTURA Y APROBACION, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LAS SESIONES ANTERIORES CELEBRADAS LOS PASADOS DIAS 19, 20 y 21 DE MAYO DE 1987

El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.

Estamos en el punto primero del orden del día. Esta Presidencia dijo ayer que el acta de la sesión anterior y la de ayer se aprobarían hoy. Si los señores Senadores no tienen inconveniente, a fin de que se imprima y pase a poder de los señores portavoces, aprobaremos solamente el acta de la sesión celebrada los 19, 20 y 21 de mayo, que ha sido puesta a disposición de los señores portavoces con la antelación necesaria. ¿Hay alguna objeción al acta? (Pausa.) ¿Se entiende aprobada? (Asentimiento.)

Queda aprobada.

El señor PRESIDENTE: Pasamos al primer punto del orden del día. Las preguntas del señor Trías i Fargas, sobre solicitud por parte del Ministerio de Hacienda de las listas de usuarios; del señor De Luna Aguado, sobre medidas para atenuar el alarmante y progresivo déficit comercial, y del señor Chueca, sobre regulación elaboración de quesos mezcla han quedado aplazadas, por cuanto el señor Ministro de Hacienda está en el Brasil. Exactamente igual ocurre con la pregunta del señor Chueca sobre causas que han motivado recurso del Tesoro al Banco de España.

PREGUNTAS:

— DE DON JOSE LUIS LOPEZ HENARES, DE LA AGRUPACION DE SENADORES DEL PL-GRUPO MIXTO, SOBRE CRITERIOS DEL GOBIERNO PARA LA DISTRIBUCION DE 875 MILLONES DE PESETAS PARA INVERSION DE CARACTER CULTURAL EN LAS CORPORACIONES LOCALES

El señor PRESIDENTE: Empezamos por la pregunta del señor López Henares, sobre criterios del Gobierno para la distribución de 875 millones de pesetas para inversión de carácter cultural en las Corporaciones locales. Tiene la palabra el señor López Henares.

El señor LOPEZ HENARES: Señor Presidente, señor Ministro, señoras y señores Senadores, en un reciente Consejo de Ministros, concretamente, si no me equivoco, el del día 5 del mes en curso, se acordó distribuir 875 millones de pesetas para inversiones de carácter cultural en las corporaciones locales. Nuestra sorpresa ha sido que hay algunas provincias que no han recibido en esta distribución ni una sola peseta. Por esa razón, señor Ministro, desearíamos saber cuáles han sido los criterios del Gobierno para hacer esta distribución.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Ministro de Administraciones Públicas.

El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Almunia Amann): Gracias, señor Presidente. Efectivamente, el Consejo de Ministros ha aprobado recientemente los criterios para distribuir las subvenciones a que

hace referencia la pregunta del señor Senador. Esas subvenciones se rigen por un Decreto de 30 de abril de 1982. Las peticiones formuladas, conforme a las normas establecidas por dicho Real Decreto, fueron superiores a los recursos presupuestarios existentes. Se estableció una primera selección. Se excluyeron, en primer lugar, las que carecían de un proyecto básico u otra documentación de carácter esencial; las que no eran objeto del Real Decreto no tenían una finalidad cultural inmediata sobre la población del municipio afectado; las que la Corporación que presentaba los proyectos no era competente para su gestión, y aquellas que no contaban con informes favorables, fuese del Ministerio de Cultura o de la respectiva Consejería de la Comunidad Autónoma.

Hechas estas exclusiones, todavía había peticiones por encima de los recursos presupuestarios y, conforme a los criterios fijados ya el año anterior por la Comisión Nacional de Administración Local, quedaron excluidos en esa segunda fase aquellos proyectos que suponían ampliaciones o aumentos en el equipamiento de un proyecto primitivo ya atendido; aquellas en las que la subvención acumulada en la provincia, desde el inicio del programa de 1982, superaba las 500 pesetas por habitante o aquellos proyectos que se considerasen menos prioritarios.

Conforme a todos estos criterios se hizo la propuesta final, que fue aprobada como S. S. conoce por el Consejo de Ministros.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro.

Tiene la palabra el señor López Henares para replicar, si lo desea.

El señor LOPEZ HENARES: No es una réplica, señor Presidente, sino, sencillamente, agradecer al señor Ministro la explicación que nos ha dado.

Únicamente quería saber —no sé si dentro de los términos del Reglamento es posible— si esta distribución es definitiva para este ejercicio o si puede haber alguna fase ulterior.

El señor PRESIDENTE: No es posible, señor López Henares, pero, si el señor Ministro quiere contestar, violaremos el Reglamento.

El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Almunia Amann): Con mucho gusto, señor Presidente, en la medida en que me quede tiempo.

Efectivamente, en el acuerdo de Consejo de Ministros el punto primero es la aprobación de la distribución. En el punto segundo se hace referencia a que los remanentes de las subvenciones del Estado que por bajas en la contratación de las obras o por anulaciones totales o parciales se originen, podrán ser redistribuidos por acuerdo del Ministro para Administraciones Públicas entre Corporaciones locales o Comunidades Autónomas uniprovinciales distintas de aquellas en las que se produjeron las primi-

tivas aprobaciones, con algunas condiciones más que si quiere el señor Senador, le puedo facilitar.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro.

— DE DON MIGUEL BARCELO PEREZ, DEL GRUPO DE COALICION POPULAR, SOBRE YACIMIENTO ARQUEOLOGICO EN TOSALL DE LA CALA, BENIDORM (ALICANTE)

El señor PRESIDENTE: Pregunta del señor Barceló Pérez sobre yacimiento arqueológico en Tosall de la Cala. Tiene la palabra el señor Barceló.

El señor BARCELO PEREZ: Muchas gracias, señor Presidente. Señor Ministro, señorías, la pregunta se refiere a que en Tosall de la Cala, en Benidorm, existe un importante yacimiento arqueológico ibero. La pregunta escueta es la siguiente: ¿Qué medida de protección y defensa de ese valioso patrimonio histórico cultural tiene prevista el Gobierno en función de las exclusivas competencias que en esta materia le son propias, de acuerdo con el artículo 140.1.28 de la Constitución?

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Tiene la palabra el señor Ministro de Administraciones Públicas.

El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Almunia Amann): Gracias, señor Presidente. Debo decir al señor Senador que la materia de que se trata, para proteger y defender el yacimiento arqueológico en Tosall de la Cala, se encuentra entre las incluidas en el Real Decreto de 13 de octubre de 1983, por el cual se transfirieron funciones y servicios del Estado en materia de cultura a la Comunidad valenciana. En la medida en que es la Comunidad Autónoma la competente, está desarrollando, como probablemente S. S. conoce, toda una serie de actuaciones para proteger el yacimiento arqueológico y el Gobierno de la nación no ha estimado necesario hacer uso de las prerrogativas o de las competencias que prevé la Ley del Patrimonio Artístico.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro.

El señor Barceló tiene la palabra.

El señor BARCELO PEREZ: Señor Ministro, señorías, es cierto lo que el señor Ministro dice, claro está, pero hay algo que seguramente el señor Ministro no conoce, y es que exactamente en el mes de diciembre de 1976 la Consejería de Cultura prohíbe las obras que se van a realizar o que se están realizando...

El señor PRESIDENTE: La pregunta realmente no ha estado, y lo siento, correctamente calificada por la Mesa

porque es de competencia de la Comunidad Autónoma. No haga S. S. cuestiones sobre temas que no afectan al Gobierno.

El señor BARCELO PEREZ: Muchas gracias.

— DE DON JOSE ALARCON MOLINA, DEL GRUPO DE COALICION POPULAR, SOBRE URGENTE CONVOCATORIA DE OPOSICIONES AL CUERPO DE VETERINARIOS TITULARES

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Alarcón Molina para formular la pregunta sobre concurso de traslados para veterinarios titulares.

El señor ALARCON MOLINA: Gracias, señor Presidente. La pregunta se refiere a cuándo serán convocadas oposiciones al Cuerpo de veterinarios titulares. Gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Tiene la palabra el señor Ministro.

El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Almunia Amann): Gracias, señor Presidente.

La convocatoria de pruebas de acceso al Cuerpo de veterinarios titulares corresponde realizarla a las Comunidades Autónomas, que son quienes tienen atribuidas las facultades de gestión a partir de las transferencias que se realizaron a principio de los años ochenta; son ellas las competentes para convocar estas pruebas, sin perjuicio de la necesaria coordinación que se ha acordado recientemente en el seno del Consejo Interterritorial de la Salud.

Las Comunidades Autónomas tienen las competencias, pero han pedido debatir en ese marco, y así se ha acordado recientemente, una coordinación de criterios para realizar esas pruebas de acceso, pero nunca podrá realizarlas ya la Administración del Estado.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
El señor Alarcón tiene la palabra.

El señor ALARCON MOLINA: La pregunta se hace precisamente por esa situación, señor Ministro, y es que esas competencias transferidas en este momento siguen pendientes de un tribunal que hay y de una Comisión interministerial. Recientemente ha habido una reunión amplia de veterinarios de España a la cual asistieron aproximadamente 3.000, y se siguen quejando de lo mismo: que nadie ha coordinado desde las propias autonomías, ni desde la Administración ni desde la Comisión organizada al efecto, tal situación.

La verdad es que la Ley de medidas urgentes para la reforma de la Función Pública creo que no reforma en absoluto lo de sanitarias o funcionarios del Cuerpo de Sanidad Local, lo cual viene arrastrándose desde el año 1969 y se reglamenta posteriormente y dice que por lo menos

se haga una oposición al año para los Cuerpos de Sanidad Local. Además, la Ley de medidas urgentes para la reforma de la Función Pública tampoco reforma nada en absoluto al respecto, sino que indica que cada trimestre o primeros de trimestre se saquen las plazas, como es lógico, para hacer una oposición o un concurso oposición. Nada de eso se ha hecho. Siguen esperando a ver qué decisión toma esa Comisión, y lo que yo intento en estos momentos, a través del propio Ministro y del Gobierno, es que se active indudablemente esa Comisión para que se acelere el proceso, dado que más del 50 por ciento de los veterinarios en estos momentos siguen desempeñando plazas interinas; de 4.100 plazas, hay más de 2.000 que siguen ejerciendo y ejecutando en régimen de interinidad. Esa situación no se puede arrastrar por más tiempo y, por tanto, de aquí que me haga eco de esos deseos de la profesión para regular definitivamente tal situación.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
El señor Ministro tiene la palabra.

El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Almunia Amann): Gracias, señor Presidente...

Yo comprendo que el señor Senador se haga eco, pero el problema es que la caja de resonancia no es ésta; serán los Parlamentos de cada una de las Comunidades Autónomas que tienen transferidas esas plazas, o plazas ocupadas o dotadas, o plazas vacantes y, por tanto, son ellas, en el desarrollo de sus propias leyes de la función pública, las que tanto en materia sanitaria como en materia de función pública deben sacar a provisión esas plazas.

Lo que se ha planteado en el Consejo Interterritorial de la Salud, que no es un órgano de decisión, sino de encuentro entre las Comunidades autónomas y la Administración sanitaria estatal, es que las 17 comunidades autónomas coordinen los criterios mínimos que permitan la homologación del sistema de acceso a los servicios de veterinarios en las distintas Comunidades. Nosotros actuamos de huéspedes de esa coordinación, pero no podemos nunca sustituir las competencias que fueron transferidas en su día a las comunidades autónomas, y eso debe entenderlo el señor Senador en esta Cámara de las autonomías.

— DE DON JOSE ALARCON MOLINA, DEL GRUPO COALICION POPULAR, SOBRE CONCURSO DE TRASLADOS PARA VETERINARIOS TITULARES

El señor PRESIDENTE: Pregunta del señor Alarcón Molina sobre urgente convocatoria de oposiciones al Cuerpo de titulares veterinarios.

El señor ALARCON MOLINA: Señor Presidente, no es esa la pregunta; parece ser que ha sido anunciada con un cierto error por parte de la Presidencia. No sé si estoy equivocado, pero mi pregunta era sobre concurso de traslados para veterinarios titulares.

El señor PRESIDENTE: Vamos a ver si hay un error,

porque en el orden del día que tengo en mi poder, y que tendrá S. S., dice literalmente: «H) De don José Alarcón Molina, del Grupo de Coalición Popular, sobre urgente convocatoria de oposiciones al Cuerpo de Titulares Veterinarios».

El señor ALARCÓN MOLINA: Señor Presidente, sí, pero...

El señor PRESIDENTE: Es cierto que tanto el Presidente, que estaba hablando con el Vicepresidente, y S. S., que estaba muy despistado, han trastocado las preguntas. Por tanto, haga S. S. la pregunta anterior.

El señor ALARCON MOLINA: Me limito, señor Presidente, a seguir la línea marcada por la Presidencia, y esta segunda pregunta se refiere a convocatoria de un concurso de traslado para veterinarios titulares, demandada desde hace años.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Ministro.

El señor MINISTRO PARA LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Almunia Amann): Mi respuesta no puede ser distinta de la anterior. También en el caso de los concursos de traslado, en el ámbito de las comunidades autónomas, la competencia para convocarlos corresponde a las mismas, y también en este caso han producido discusiones y líneas de actuación conjuntas en el seno del Consejo Interterritorial de la Salud, que, en su última reunión de 26 de mayo, ha acordado realizar concurso de traslado de veterinarios en el ámbito de cada comunidad autónoma, de conformidad con la legislación vigente, y es cada comunidad autónoma la competente, con una diferencia respecto de la pregunta anterior, y es que en este caso no se excluye para una segunda fase la posibilidad de convocar en su momento un concurso de traslado de ámbito nacional, pero previamente deben realizarse éstos en cada una de las comunidades autónomas.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro. Tiene la palabra el señor Alarcón.

El señor ALARCON MOLINA: Gracias, señor Presidente.

En este caso concreto tenemos ya alguna respuesta más positiva.

Ya desde mayo se ha decidido aconsejar por lo menos que las comunidades autónomas hagan ese concurso de traslado, pero no podemos evitar el que se haga un concurso de traslado general. Desde el año 81 no se ha hecho ninguno. Ya en esas fechas la Comunidad Autónoma Vasca y la de Cataluña se habían quedado fuera del concurso, es decir, decidieron no tener plaza y hacer un concurso por parte de ellas. Esta es una cosa que venimos arrastrando y, por tanto, no nos debe extrañar la queja que se hace de que en el resto de las autonomías no se haya he-

cho y no se haya dado un consejo oportuno para la ocupación de esas plazas.

Evidentemente, que se haga primero en las autonomías y después por parte de la Administración. Lo que sí pedimos, lógicamente, es que la Administración no se retrase inmediatamente después de celebrar el concurso las 17 comunidades autónomas.

Es una noticia que transmitiré al cuerpo de veterinarios titulares, ya que desde hace casi seis años estaba la cosa puesta en marcha. ¡Menos mal! Lo comunicaremos y sigan ustedes activando el proceso.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Alarcón. Tiene la palabra el señor Ministro.

El señor MINISTRO PARA LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Almunia Amann): Muchas gracias, señor Presidente.

No estoy convencido de que el señor Senador tenga claro cuáles son las competencias de las comunidades autónomas en este capítulo, y le aseguro que son ellas las que las tienen. Dígaselo usted también a sus interlocutores del cuerpo de veterinarios, porque, si no, puede inducirles a confusión el creer que somos nosotros los que podemos hacerlo, y resulta que son las diecisiete Comunidades Autónomas quienes tienen que hacerlo.

En el tema del concurso de traslado, cabiendo la posibilidad de uno de ámbito nacional inmediatamente después del concurso de traslado de cada Comunidad Autónoma, el Ministerio de Sanidad se dirigió a los Consejeros de las diecisiete Comunidades Autónomas consultando sobre la oportunidad de este concurso de traslado hace algunos meses y sólo contestaron —dígaselo también al cuerpo de veterinarios— seis Comunidades Autónomas, que son: Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla-León, Extremadura, Madrid y Navarra. Dígaselo también a los que presiden alguna Comunidad Autónoma de su Grupo Parlamentario.

El señor PRESIDENTE: Señor Alarcón, me dice el señor Arespachoga que quien ha trastocado las preguntas ha sido el Presidente. «Fiat justitia». Lo siento.

Señor De los Mozos, ¿tiene S. S. inconveniente en que pongamos su pregunta en último lugar? (*Denegaciones.*)

— DE DON ENRIQUE BOLIN PEREZ-ARGEMI, DEL GRUPO DE COALICION POPULAR, SOBRE DESTINO DEL EDIFICIO QUE SE ESTA CONSTRUYENDO EN EL TERMINO MUNICIPAL DE MOLLINA (MALLAGA)

El señor PRESIDENTE: Pregunta del Senador señor Bolín, sobre destino del edificio que se está construyendo en el término municipal de Mollina.

El señor Bolín tiene la palabra.

El señor BOLIN PEREZ-ARGEMI: Señor Presidente, se-

ñor Ministro, señorías, la pregunta va destinada a saber para qué se va a utilizar el edificio, que se encuentra en avanzado estado de construcción, de Mollina.

El señor PRESIDENTE: El señor Ministro de Justicia tiene la palabra.

El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Ledesma Bartret): Señor Presidente, señorías, el centro de Mollina fue concebido como un centro piloto para la protección y amparo de los hijos de familias emigrantes que se encontraban en situación de desprotección. La experiencia acumulada desde que se tomó aquella decisión aconseja hacer un cambio en ese planteamiento, y en la actualidad las previsiones son adecuar ese centro a las necesidades que genera el proyecto de ley que está en preparación sobre protección y reforma de menores y jóvenes.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro.

El señor Bolín tiene la palabra.

El señor BOLIN PEREZ-ARGEMI: Gracias, señor Presidente; gracias, señor Ministro.

Quería agradecerle su respuesta, porque es una inquietud que hay en la provincia de Málaga, sobre todo teniendo en cuenta que se ha hecho una inversión aproximada a los 600 millones. Transmitiré su contestación a los distintos medios de información, y creo que será suficiente. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

El señor Ministro de Justicia tiene la palabra.

El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Ledesma Bartret): Señor Presidente, señorías, quizá entienda mejor la contestación si añado a lo que he dicho antes que, como sin duda usted sabe, el artículo 65, creo que es, del Código Penal establece que, cuando se trate de mayores de dieciséis años y menores de dieciocho, exista la posibilidad de sustituir la pena por un internamiento en un centro para el tratamiento de estos jóvenes. Lamentablemente, no de ahora, sino de siempre, España ha carecido de este tipo de centros. Puede ser necesario en el futuro hacer su implantación. Lo estamos estudiando. No digo que sea una decisión definitivamente tomada la posibilidad de que ese centro pueda servir para esta función, para esta finalidad, por lo cual el centro no tendría un sentido en absoluto penitenciario, sino un carácter predominantemente asistencial, pedagógico, de tratamiento de la franja de edad que comprende, dentro de esas cifras que le he dado, entre dieciséis y dieciocho años.

— DE DON MIGUEL BARCELO PEREZ, DEL GRUPO DE COALICION POPULAR, SOBRE CONSUMO Y TRAFICO DE DROGAS EN LOS CENTROS PENITENCIARIOS

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro.

Tiene la palabra el señor Barceló para formular su pregunta sobre consumo y tráfico de drogas en los centros penitenciarios.

El señor BARCELO PEREZ: Gracias, señor Presidente.

Señor Ministro, señorías, en los primeros días del pasado mes de diciembre de 1986 se requería información sobre las aprehensiones de droga blanda y dura en los centros penitenciarios durante los años 1982, 83, 84, 85 y parte del 86. Al no obtener respuesta del Gobierno sobre dicha información, se presume la falta de estadísticas adecuadas sobre el consumo y tráfico de drogas en los centros penitenciarios. Toda vez que para resolver cualquier problema se necesita poseer previamente la información necesaria, este Senador pregunta si se están elaborando ya estadísticas por parte del Gobierno sobre el asunto planteado en las respuestas y contestaciones escritas y demás cuestiones que permitan cuantificar adecuadamente el fenómeno del tráfico y consumo de drogas en los centros penitenciarios.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

El señor Ministro tiene la palabra.

El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Ledesma Bartret): Señor Presidente, señorías, sí, se están elaborando.

El señor BARCELO PEREZ: Muchas gracias, se están elaborando, pero yo quisiera, si pudiera ser, que el Ministro fuera un poco más preciso sobre cuándo se podrá saber todo esto, porque el fenómeno es serio. Lo sabe el señor Ministro y me consta que su sensibilidad lo tiene muy presente en todo momento, pero es un asunto muy grave y yo quisiera, si es posible, que nos anticipase la fecha en que ya se sabrá algo al respecto.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Ministro de Justicia.

El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Ledesma Bartret): Señor Presidente, señorías, cada vez que en un centro penitenciario se produce la aprehensión de droga, en la medida que sea, normalmente en ínfima cuantía, se incoa un expediente, dejando constancia en el mismo de la cantidad de droga que ha sido aprehendida. El expediente se incoa bien para exigir una responsabilidad disciplinaria al interno —bien es un caso excepcional— para remitirlo al juzgado competente y que se incoe el correspondiente sumario. Y como consecuencia de los datos que obran en esos expedientes, le puedo asegurar que tenemos un conocimiento de la cifra global que se aprehende en distintos centros penitenciarios. Basta hacer la suma para conocer con exactitud cuál es la cantidad total en cada mes y en el conjunto de los centros penitenciarios españoles.

Le puedo decir que no se publicaba o no se seguía la estadística por la que tanto interés tiene S. S., pero yo, coin-

ciendo con S. S., he llegado a la conclusión de que efectivamente es conveniente llevar esa diferencia mes tras mes y centro por centro, comprendiendo la totalidad de los centros penitenciarios españoles y he dado las órdenes oportunas. Por tanto, dentro de muy poco tiempo, señoría, estaré en condiciones de decirle cuánta droga es aprehendida en los centros penitenciarios españoles. Le agradezco que su sugerencia haya dado pie a tomar esta decisión, que es buena y útil y, por eso le doy las gracias, señoría.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.

— DE DON JOSE LUIS DE LOS MOZOS Y DE LOS MOZOS, DEL GRUPO COALICION POPULAR, SOBRE PALACIO DE LOS VIVERO

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor De los Mozos, sobre el Palacio de los Vivero.

El señor DE LOS MOZOS Y DE LOS MOZOS: Con la venia, señor Presidente, señorías, señor Ministro.

El Palacio de los Marqueses de Vivero, en Valladolid es un palacio del siglo XV, donde contrajeron matrimonio los Reyes Católicos y por tanto es un lugar histórico muy importante. En él estuvo albergada la Real Chancillería, el Tribunal Supremo de Castilla, que luego abarcó hasta el Tajo, después de crearse la segunda Cancillería, la de Granada, y que actualmente está derruido, salvo una parte restaurada hace muchos años, donde se alberga el archivo de la Real Chancillería. Sin embargo, el espacio para este archivo es muy pequeño, porque hay que tener en cuenta que los documentos de la Real Chancillería suponen nada menos que dieciocho kilómetros de documentos. Entonces, es muy importante la restauración por el contenido histórico que tiene y por la función que cumple. Por ello, nos interesa preguntar al señor Ministro cómo va el estado de reparación del Palacio.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

El señor Ministro tiene la palabra.

El señor MINISTRO DE RELACIONES CON LAS CORTES Y DE LA SECRETARIA DEL GOBIERNO (Zapatero Gómez): Señor Presidente, efectivamente, el propósito es culminar las obras de restauración, que son realmente importantes y urgentes, como señala el señor Senador, y los cálculos que en el Ministerio de Cultura tienen es proceder a la adjudicación de la última fase de las obras en 1988. Esto en cuanto a las obras de restauración.

Respecto a la utilización, como ha señalado S. S., en la actualidad, una parte está dedicada a uso de la Real Academia de Medicina y en el futuro se piensa ubicar allí mismo el Archivo Provincial.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro.

El señor De los Mozos tiene la palabra.

El señor DE LOS MOZOS Y DE LOS MOZOS: Únicamente urgir la realización de esas obras, dada la naturaleza y la importancia del lugar, porque no solamente los turistas constantemente van preguntando, sino también los investigadores, y produce rubor que en una ciudad relativamente importante, como es Valladolid, un edificio de tanto prestigio, por el hecho histórico y por la importancia de su destino, se encuentre en estado tan lamentable.

Además, hay que tener en cuenta que este edificio está más o menos conectado con la conmemoración del Descubrimiento de América, porque no hay que olvidar que los Reyes Católicos son los personajes más importantes de aquel hecho histórico.

Por eso, interesa urgir esta reparación, por lo que supone una vergüenza local. Es decir, los que somos de Valladolid nos sentimos un poco avergonzados cuando los que vienen de fuera nos preguntan por el lugar y tenemos que enseñarles un montón de ruinas, con un aspecto muy lamentable.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor De los Mozos.

Tiene la palabra el señor Ministro.

El señor MINISTRO DE RELACIONES CON LAS CORTES Y DE LA SECRETARIA DEL GOBIERNO (Zapatero Gómez): Señor Presidente, efectivamente, señor Senador, algo se ha hecho desde 1980, en que se invirtieron 8 millones en obras básicas de consolidación; en 1981 se reparó toda un ala del citado edificio, y en 1986, así como en la actualidad, se está en la fase de redacción de un anteproyecto que cubre ya todo el edificio.

Como le indicaba, el cálculo que nosotros tenemos hecho implica que en 1988 se podría perfectamente adjudicar las obras, con lo cual esperamos que para 1992 todos los ciudadanos, no solamente los de Valladolid, podamos disfrutar de la vista de tan bello edificio. *(El señor Vicepresidente, Rodríguez Pardo, ocupa la Presidencia.)*

El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Pardo): Muchas gracias, señor Ministro. Finalizado este punto del orden del día, pasamos al siguiente.

INTERPELACIONES:

— DE DON RAMON TRIAS I FARGAS, DEL GRUPO CONVERGENCIA I UNIO, SOBRE SI TIENE EL GOBIERNO UNA IDEA CLARA DE LOS GASTOS DIRECTOS QUE EXIGE LA INVESTIGACION, ASI COMO DE LAS INVERSIONES EN EQUIPO Y PERSONAL AUXILIAR NECESARIOS PARA LLEVAR ADELANTE LA MISMA Y, EN TODO CASO, DE QUE MANERA PIENSA EL GOBIERNO PROMOVER LA INVESTIGACION PRIVADA

El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Pardo): El si-

guiente punto del orden del día es el de interpellaciones. En primer lugar, la interpellación número 35, de don Ramón Trías i Fargas, del Grupo de Convergència i Unió, sobre si tiene el Gobierno una idea clara de los gastos directos que exige la investigación, etcétera, que fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», de fecha 21 de mayo de 1987.

Para la defensa de su interpellación, tiene la palabra el señor Trías i Fargas. *(El señor Presidente ocupa la Presidencia.)*

(El señor Del Burgo pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Sí, señor Del Burgo.

El señor DEL BURGO TAJADURA: Señor Presidente, como no se ha hecho ninguna referencia a la interpellación que estaba antes que la del señor Trías i Fargas, y yo no tengo ningún inconveniente en dejarla para la semana próxima, desearía conocer si efectivamente es así, que queda pospuesta hasta la semana próxima.

El señor PRESIDENTE: Su señoría ha visto cómo el Presidente ha cambiado unas palabras con el señor Ministro, y entonces se le ha dado la palabra al señor Trías i Fargas. Ello será porque siguiendo las indicaciones de S. S. queda aplazada su interpellación y el señor Ministro compromete su asistencia.

El señor DEL BURGO TAJADURA: De acuerdo, señor Presidente. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Señor Trías i Fargas, puede hacer uso de la palabra.

El señor TRIAS I FARGAS: En primer lugar, creo que me corresponde agradecer al señor Del Burgo y al señor Ministro las facilidades que me dan para que pueda formular esta interpellación hoy, ya que me sería muy difícil hacerla la semana entrante.

Me parece a mí que el tema que yo deseo abordar con esta interpellación es muy conocido, pero no por eso menos importante, menos urgente, y a mi juicio menos resuelto de los todavía muchos que tenemos pendientes en este país.

A mí me parece, sinceramente, y sin desear pecar de grandilocuente, que ésta es una cuestión de vida o muerte social para España. Es decir, o nosotros seguimos por la vía de la investigación y la innovación técnica y científica, o nos quedaremos al margen de unas actividades que se van concentrando cada vez más en dos o tres países.

En este momento nosotros tenemos la sensación, y me refiero al gran público, entre el que me cuento, no pretendo ser un especialista en estas materia, ni muchísimo menos, pero el gran público tiene la sensación de que España dedica pocos recursos a esta cuestión, y que además los dedica mal, es decir, con escaso rendimiento. Por eso me ha parecido que esta interpellación tenía sentido.

Lo que con ella se pretende es, sobre todo y antes que

nada, obtener información, y en segundo lugar sugerir algunas líneas de actuación. En todo caso, quiero anunciar al señor Ministro que no se presenta esta interpellación con espíritu de partido, ni mucho menos con espíritu polémico. Se presenta para ver si el señor Ministro nos puede tranquilizar, y para intentar saber qué podemos hacer en materia tan importante.

De entrada, yo quisiera que quedara bien claro que no es defecto del factor humano, de los valores humanos de los españoles, el que nuestra investigación no esté tan adelantada como quisiéramos. Tenemos muchos supuestos de gente eminente. Me refiero por ejemplo a Severo Ochoa, al profesor Trueta, al profesor Oro y tantos otros que cuando han tenido las condiciones adecuadas para investigar han producido óptimos resultados en el extranjero. Por tanto, nuestros fallos, si los hay, hay que buscarlos por otro lado.

Otra consideración que a mí me parece relevante es que este tema de la investigación está en la base de este fenómeno muy conocido popularmente por la «fuga de cerebros»; esto es más serio de lo que parece. Hoy mismo, en un periódico nacional, aparecen las quejas de una serie de becarios que denuncian un hecho importante, es decir, hay becas, empieza a haber ayudas, hay contribuciones a su preparación como investigadores, pero después no hay salidas ni hay forma de que la sociedad emplee estos cerebros, estas personas, estas energía jóvenes, que muchas veces encuentran colocación, porque son competentes y capaces, en la investigación fuera de nuestras fronteras. Esto es algo que realmente debe preocupar.

Yo leí también hace poco en una revista especializada, que el presidente de una multinacional inglesa anunciaba que si esta fuga de cerebros desde Inglaterra hacia Estados Unidos continuaba, las grandes empresas que necesitan de la investigación tendrán que seguir a los investigadores allá donde se encuentren. De manera que perderemos los cerebros y las empresas y, al final, quedaremos en una situación realmente tercermundista.

Por otro lado, un tema también fundamental es el de la investigación básica o la investigación aplicada. Hay tendencia, y es lógico, a todos los niveles, el político, el ciudadano, a buscar soluciones a corto plazo; pero hay que pensar que la investigación básica es la que suministrará los adelantos técnicos de aplicación diaria dentro de diez años. No podemos abandonar esta investigación básica.

Yo quisiera recordar, por fin, que hay unos condicionamientos materiales evidentes para que la investigación siga adelante, que son precisamente, ya lo sabemos, laboratorios, personal auxiliar, instalaciones, etcétera. Pero quisiera recordar aquí que en materia de investigación se produce el mismo fenómeno que en cualquier instalación industrial: se necesitan dimensiones óptimas o, por lo menos, mínimas. La dimensión óptima de una empresa, de una planta industrial, es aquella que obtiene productos máximos con costes mínimos; esto quiere decir que si gastamos por encima de esta fórmula, tiramos el dinero, y si gastamos por debajo, desperdiciamos los recursos. Hay que saber qué dimensión le vamos a dar a esta investigación, y no sólo referida a centros separados, porque es evi-

dente —de esto hablaremos en seguida— que hace falta la descentralización, pluralidad de centros, pero hay que buscar un conjunto nacional para que se cree un clima propicio a la investigación a todos los niveles geográficos del país.

Por tanto, insistiendo, señor Ministro, en que no me anima ningún espíritu de polémica, sino el muy constructivo de allegar información, quisiera repasar unas cuantas deficiencias que se detectan en la situación actual, con la esperanza de que usted me pueda decir que esto ya no es así, que es distinto y que vamos por buen camino.

En primer lugar, parece que se gasta entre el 0,4 y el 0,6 por ciento del producto interior bruto en investigación. Esta cifra nos parece realmente insuficiente, por lo menos si la comparamos con la de otros países; pero, además, debemos tener presente cuál es el ritmo de crecimiento de esta cifra, porque tenemos datos, por ejemplo, de que en Inglaterra ha crecido un 20 por ciento en los últimos diez años; en Alemania, Estados Unidos y Francia, un 50 por ciento; y en el Japón, un 100 por ciento. Resultado: Gran Bretaña, que tenía en los años sesenta el doble de premios Nobel por habitante que los Estados Unidos, ha invertido la situación y ahora están los Estados Unidos en cabeza. Esto quiere decir que no sólo hace falta tener dinero suficiente, sino que es preciso mantener un ritmo de crecimiento proporcional. *(El señor Vicepresidente, Rodríguez Pardo, ocupa la Presidencia.)*

También quisiéramos saber si hay información adecuada para conocer quién suministrará los fondos: Ministerio de Agricultura, Ministerio de Educación y Ciencia, Ministerio de Industria, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Ministerio de Sanidad y Consumo..., porque según el origen de estos fondos sabremos más o menos la orientación de los proyectos de investigación.

No sé si estos datos segregados así están al alcance del público, pero creo que son importantes. Hay otros datos, como cuánto se invierte por parte del sector público y del sector privado. Tenemos la impresión de que en España el sector privado casi no gasta nada, y esto me parece un fallo considerable, porque si sólo fomentamos la investigación pública nos exponemos a que nuestras empresas se dediquen a comprar el «know how» y las patentes en el extranjero y quedemos, a fin de cuentas, como nación en segunda o tercera fila y como empresas fuera de competencia.

Materia de planificación y coordinación. Es un tema delicado, porque no podemos duplicar esfuerzos, ya que no se puede hacer un trabajo serio y sensato a nivel nacional sin una planificación adecuada, pero me parece que debe establecerse un equilibrio también adecuado entre la planificación, el control de calidad, etcétera, y la libertad necesaria en toda actividad investigadora. Una libertad que puede empezar por las comunidades autónomas, que tienen capacidad para interpretar las necesidades propias de su zona; la autonomía universitaria, claramente involucrada en este esfuerzo conjuntado, pero no homogeneizado, etcétera.

Otro tema que ha preocupado a los investigadores, con los que yo he hablado por lo menos, es si hay una conexión

adecuada entre la investigación y los sectores económicos, los que van a tener que aplicar los adelantos de la ciencia y de la técnica.

Podemos insistir en una serie de deficiencias, aparentes al menos, que yo expongo con la esperanza de que puedan ser disipadas estas dudas, como, derivando de la falta de recursos que he denunciado al principio, que la infraestructura material es totalmente insuficiente y el número también insuficiente de investigadores. Por ejemplo, sabemos que en Cataluña hay 61 becas en la Universidad Central de Barcelona; 31 en la Autónoma y 16 en la Politécnica, creo recordar. En definitiva, cien personas jóvenes que están empezando su andadura investigadora y que por ellos mismos no son capaces de crear un prestigio que a mí me parece, señor Ministro, que es también relevante. En el extranjero un muchacho que se dedica a la investigación, aparte de su vocación natural, su empeño, su esfuerzo y su ilusión, no busca dinero, sino que busca un prestigio social. Realmente, en este país un muchacho joven se puede presentar ante sus amigos, ante una muchacha que le gusta diciendo: soy investigador, y probablemente nadie le tomará en serio. Mientras ésta sea la situación, mal podremos llevar a los mejores a que se dediquen a este tema tan vital para el país.

¿Qué hace el Gobierno para intentar aumentar este prestigio, que realmente hace falta? Yo veo anuncios en la televisión que hablan del prestigio y de todo lo bueno que puede encontrar un joven en la Marina española, por ejemplo. Me parece muy bien. ¿Se podría hacer algo en esa línea de cara a prestigiar la actividad investigadora?

Yo creo que uno de los temas fundamentales es precisamente este equilibrio, que en el absentismo de la empresa privada en el terreno investigador lo hace más acuciante. La tendencia de la Administración central a centralizar, cosa que hasta cierto punto hemos dicho antes que es buena, porque algo hay que programar y controlar; sin embargo, tiene el tremendo peligro de coartar la imaginación y la libertad de iniciativa en este tema en que la creatividad es absolutamente necesaria, sin la cual no hay investigación auténtica y esto depende mucho de la burocratización. Yo siempre he denunciado en España el vicio de la estatalización, que no depende de partidos, que no depende más que de nuestra manera de ser, probablemente formada a través de siglos de Estado central y centralizado.

En los proyectos de investigación hay una media del 80 por ciento del personal dedicado a la administración de los proyectos investigadores, es decir, se dedica una parte absolutamente desproporcionada a personal y elementos administrativos, y una parte ridícula y exigua queda libre para lo que es propiamente la actividad investigadora. Yo creo que debe quedar muy claro este equilibrio entre la reglamentación y la libertad. No creo que la revolución copernicana, que la manzana de Newton, que la teoría de la relatividad de Einstein se descubran por decreto ni porque unos funcionarios, más o menos brillantes, así lo hayan acordado. Pero como, al mismo tiempo, es necesario establecer unos mínimos de rentabilidad y seriedad, tenemos que compaginar las dos cosas y esto no es fácil.

Para terminar —y no pretendo que el señor Ministro se tome la molestia de ofrecernos ahora una explicación pormenorizada que podría ser una especie de cursillo para principiantes en materia de investigación—, lo que yo pido, más que nada, es saber si realmente existe esta preocupación. Sé que el señor Ministro está preocupado por este tema —no tiene que decírmelo, porque lo sé, lo sabe la Cámara y estoy seguro que lo sabe la opinión pública—, pero, a pesar de todo, la opinión pública tiene sus dudas, no ve las cosas claras y por ello me he permitido presentar esta interpelación.

Para terminar, quisiera plantearle al señor Ministro mis preocupaciones, para ver si están en el buen camino, son aprovechables o ya se ponen en marcha. En primer lugar, cómo equilibrar los deseos y las iniciativas de los miembros de la Academia o de la Universidad, del mundo investigador, con las instituciones para las que trabajan, porque no siempre profesores y Universidad, por ejemplo, están de acuerdo. Cómo se equilibran las necesidades de las distintas autonomías en esta materia. Cómo equilibrar la docencia con la investigación en las instituciones superiores de Educación y Ciencia. Cómo equilibrar la investigación humanística con la investigación científica. Cómo equilibrar la opinión de los especialistas con las fórmulas y los formulantes generalistas. Cómo equilibrar una política de merecimientos en la ejecución de la investigación con algo que también pesa, que es la política de la política en esta materia.

Créame, señor Ministro, agradeceré todo lo que nos pueda decir respecto de esta interpelación.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Pardo): Gracias, Senador Trías.

Tiene la palabra el señor Ministro.

El señor MINISTRO DE EDUCACION Y CIENCIA (Maravall Herrero): Señor Presidente, señorías, señor Trías Fargas. Agradezco la oportunidad de realizar un debate, inevitablemente breve, en esta sesión sobre temas de investigación.

Sabe usted que la Ley de Fomento y Coordinación General de la Investigación Científica y Técnica fue promulgada el 14 de abril del pasado año y que esta Ley ha establecido un marco legal que regula y ordena toda la actividad investigadora en España; dicha Ley instituye el Plan Nacional de Investigación Científica y de Desarrollo Tecnológico, Plan con el que se pretende un nuevo planteamiento coordinado de todas las actividades de investigación y desarrollo en España, evitando dispersiones —dispersiones a las que usted ha hecho referencia—, evitando superposiciones que han existido tradicionalmente en la actividad investigadora en España y procurando también un nuevo impulso en general a la actividad de investigación, impulso que lógicamente ha de tener también un aspecto económico importante; impulso también a la investigación en el sector público y en el sector privado, sobre la base de que dicha investigación en ambos sectores atienda a prioridades de carácter nacional.

Sabe usted también que dicha Ley de Fomento y Coordinación General de la Investigación Científica y Técnica a su paso por el Senado fue enmendada, creándose una Comisión Mixta entre el Senado y el Congreso, Comisión Mixta que se ocupa de los temas de investigación y que ha celebrado desde entonces dos reuniones, la última muy recientemente, con la presencia del Secretario de Estado de Universidades e Investigación, que suministró una información muy exhaustiva sobre el grado de desarrollo de ese Plan Nacional que crea la Ley de Fomento y Coordinación General de la Investigación, estado del Plan, estimaciones presupuestarias y prioridades que dicho Plan pretende recoger.

En su pregunta hace usted particular hincapié en que los fondos para la investigación universitaria —lo que se conoce como el FIU—, representan en 1987, 50.000 pesetas por investigador y utiliza usted esa cantidad como símbolo de las insuficiencias, de las carencias que existen en el terreno de la investigación española.

Señor Trías Fargas, creo que resulta poco adecuada la denominación tradicional del Fondo de Investigación Universitario, ha sido recogido así tradicionalmente en los Presupuestos Generales del Estado e induce efectivamente a confusión. Induce a confusión porque con esa denominación parece indicar que la investigación universitaria se nutre exclusiva y fundamentalmente de tal partida y, por tanto, da lugar a apreciaciones defectuosas en el sentido de ¿es suficiente, es clarísimamente, no lo es, tal partida para fomentar la investigación universitaria?

El Fondo de Investigación Universitaria suministra unos fondos mínimos que se reparten entre universidades para la cobertura de aspectos investigadores de muy bajo coste; es una cantidad que tiene un origen presupuestario lejano y que solamente financia —repito— actividades de baja cuantía, nunca priorizadas; se reparten entre las universidades y atienden a gastos mínimos que no responden lógicamente a la financiación que alimenta la investigación. Los fondos que alimentan de verdad la investigación universitaria, a que usted ha hecho referencia en su pregunta muy certeramente, son los correspondientes al Fondo Nacional para el Desarrollo de la Investigación Científica y Técnica, fondo que han dependido tradicionalmente de la Comisión Asesora, de la conocida como CAYCIT, y ha pasado esta responsabilidad de la CAYCIT a la Comisión Interministerial creada por la Ley de Fomento y Coordinación de la Investigación, Comisión Interministerial que tiene un peso muy grande a la hora de fijar las prioridades de la investigación en España.

Por citar algunos datos, para que vea usted que sus estimaciones sobre la investigación universitaria y sobre la investigación en general tienen que rectificarse a la luz de los datos últimos: el Fondo Nacional para el Desarrollo de la Investigación Científica y Técnica, que es la fuente principal pero no exclusiva de la investigación universitaria, ha evolucionado en los últimos años del modo siguiente: 1983, 6.564 millones de pesetas. Contrasta drásticamente con los 500 millones de aquel año del Fondo de Investigación Universitaria, porque en vez de 500 son 6.564. En 1987 aumenta a 12.500 millones, es decir, que

el Fondo Nacional para la Investigación se ha duplicado entre 1983 y 1987. Esta es la fuente fundamental de la investigación universitaria, pero no es la única.

Este año se reparte para investigación universitaria también, como promoción general del conocimiento, dentro de este Fondo Nacional, 6.678 millones a proyectos de investigación y a gastos de infraestructura para que haya mejores laboratorios en los departamentos universitarios, aparte de otras partidas menores que figuran en el Fondo Nacional.

Las universidades también obtienen fondos adicionales participando en programas orientados hacia áreas prioritarias, por ejemplo, el plan de microelectrónica, el plan de acuicultura, el plan de biotecnología; las universidades participan en dichos planes, que se escapan también de la estimación que había hecho usted. Esa es otra fuente importante de financiación de las universidades, que debe incrementarse sustancialmente con la aprobación del Plan Nacional. Con el Plan Nacional, en efecto, se permitirá que las universidades participen en aquellas prioridades de investigación que definamos como tales, en las que participará el Senado, a través de esa Comisión Mixta que examinará el Plan Nacional.

Otra partida importante de la financiación de la investigación universitaria es la formación de personal investigador. En este año, 1987, para formación de personal investigador —esos investigadores por los que usted preguntaba— está previsto un gasto de 3.146 millones de pesetas por parte del Ministerio de Educación y Ciencia, para lo cual existe una partida presupuestaria, a la que hay que sumar el esfuerzo que realizan otros departamentos, las comunidades autónomas y entes privados de fomento de la vocación investigadora. Como ejemplo del fomento gradual de la investigación en España le diré que el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en los últimos cuatro años ha cubierto un tercio del total de sus plazas, lo que significa un esfuerzo muy grande de renovación de la actividad investigadora del Consejo y el ofrecimiento de oportunidades a jóvenes investigadores.

Ahora bien, le diré, señor Trías, algo que me parece importante. Es cierto que necesitamos más investigadores trabajando a tiempo completo en España, pero aún más necesitamos ingenieros y tecnólogos. Es el área, dentro de la investigación y el desarrollo, donde las deficiencias en materia de personal —o de capital humano si quiere usted— son más acuciantes. De ahí que la reforma de los planes de estudio universitarios sea tan importante, porque en estos momentos están formándose en las áreas de tecnología aproximadamente la mitad de la proporción que requeriría un país del calibre industrial y económico de España. Hacia esa dirección está encaminada una buena parte de la ampliación de las enseñanzas universitarias de las que hablaba.

Hablando del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que es otro de los organismos centrales en el desarrollo y la formación de la investigación en España, el presupuesto de 1987 se situó en torno a los 20.000 millones de pesetas, que hay que añadir también a la financiación que estábamos señalando.

El campo de la investigación privada —saliéndonos del contexto universitario— ha estado siempre fomentado a través de los planes concertados de investigación, para los que este año está previsto un gasto de unos 3.200 millones de pesetas aproximadamente. Le diré que, en general, en todos los países hay un debate sobre cómo promover la investigación en el sector privado. La investigación del sector privado en España todavía aporta poco. En Europa el sector privado representa, en general, alrededor del 60 por ciento del esfuerzo total en investigación y en desarrollo. En España representa, tanto la empresa pública como la privada, solamente un tercio y es necesario estimular ese esfuerzo pero, ¿cómo hacerlo? El debate, en general, se centra en si hay que hacerlo a través de exenciones fiscales o de contribuciones, de ayudas económicas o de programas concertados. El debate en todos los países industriales se está orientando por la segunda vía, por la de la contribución, de la subvención, de los programas concertados, porque en un país de las características del nuestro sabe usted que muchas de las exenciones fiscales se dedicarían a actividades que no son de investigación y desarrollo.

Este es, como verá usted, un mapa del esfuerzo investigador que excede con mucho los 780 millones que el Fondo de Investigación Universitaria tiene presupuestado en 1987; es infinitamente superior, de tal forma que si suma todo —hablando ya no solamente de investigación universitaria, sino del total, que son los datos que usted me preguntaba, señor Trías— verá que el gasto total en investigación y desarrollo en España en 1987 cabe estimarse en torno a los 190.000 millones de pesetas. Esta cantidad representa aproximadamente el 0,65 por ciento del Producto Interior Bruto. Si el sector privado en España realizara la aportación que realiza en la Comunidad Económica Europea, estaríamos por encima del 1 por ciento. De esta cantidad aproximadamente 120.000 millones, como le decía, dos tercios, representa el esfuerzo de las Administraciones públicas. Sólo un tercio, como señalaba, corresponde a las empresas, tanto públicas como privadas. De la parte correspondiente a las Administraciones públicas, aproximadamente el 80 por ciento —y éste es un dato negativo, señor Trías— corresponde a fondos sectoriales, de tal forma que, entre otros objetivos, lo que pretende el Plan, que va a ser plurianual, como usted sabe, es: primero, incrementar la participación del sector privado y, segundo, incrementar el peso no de los fondos sectoriales, sino de los fondos de carácter horizontal que tradicionalmente gestionaba la Comisión Asesora y el CE-DETI, de tal forma que tengamos unos presupuestos de investigación dirigidos hacia prioridades y mucho mejor coordinados.

Las cantidades ya asignadas no son tan irrelevantes, han ido creciendo a lo largo de estos años, y creo que la información que se recoge de los bancos de datos internacionales referidos a investigación es estimable.

Si cogemos cuatro grandes áreas de investigación: física, química, biología y tecnología, nos encontramos con que la investigación en España en los tres últimos años se ha incrementado en física, la general un 23 por ciento,

la universitaria un 43 por ciento; en química, la general un 28 por ciento, la universitaria un 86 por ciento; en biología, la general un 55 por ciento, la universitaria un 166 por ciento, y en tecnología, la general un 46 por ciento y la universitaria un 103 por ciento. Por eso, cuando se pretende hacer diagnósticos de la Universidad española, es bueno, como digo muchas veces, que el árbol no impida ver el bosque; y el bosque la verdad es que incluye muchas personas que han estado realizando a lo largo de estos años una investigación creciente, tanto en términos cuantitativos como cualitativos.

Señor Trías, en lo que se refiere a la implicación del sector privado en el tema de la investigación, es un reto que pasa no solamente por el Plan Nacional, por la participación del sector privado en programas, por su papel central en el Consejo Asesor de la Ciencia y de la Tecnología, sino también por el papel que el CEDETI juega en toda la elaboración y en el desarrollo posterior de la investigación realizada en los programas nacionales, por la participación activa del sector privado en los consejos sociales de las Universidades, y por la utilización por parte del sector privado de las vías de concertación con departamentos universitarios, que establece el artículo 11 de la LRU, que permite establecer contratos y convenios entre el sector privado y departamentos universitarios para realizar investigación. Por tanto, respecto del sector privado, lo que es necesario es que se movilice, respondiendo a posibilidades que ya existen y respecto de las cuales se le está incentivando para que responda.

Pero tendremos ocasión de debatir estas cuestiones con motivo del examen del Plan Nacional de Investigación. Este Plan Nacional de Investigación está ya en estado muy avanzado; por parte de la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología se ha realizado un trabajo importante, y está siendo informado por las comunidades autónomas, que tienen responsabilidad en el Consejo General —responsabilidad de coordinarse y de integrar los programas que tengan interés nacional— y será luego informado por el Consejo Asesor de la Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, donde está el sector productivo. De tal forma que estimo que a final de este año el Plan Nacional estará ya elaborado; es un plan plurianual, lo cual no es óbice para que en los presupuestos de 1988 se recoja ya una función integrada de investigación con las prioridades temáticas, a las cuales se asignan recursos por parte de las Cortes a la hora de aprobar los Presupuestos Generales del Estado.

Los grandes temas previstos —y anticipo un poco lo que van a ser las líneas de ese debate, señor Trías, aprovechando que usted me da hoy la oportunidad— son: el primero, tecnologías de la producción y de las comunicaciones, con programas nacionales relativos a nuevos materiales, fotónica, automatización y robótica, microelectrónica, información y comunicaciones, entre otros; un segundo gran bloque de investigación en agroalimentación y recursos naturales, con investigación agrícola, tecnología de alimentos, recursos geológicos, recursos marinos y acuicultura, recursos hidráulicos y ganadería; un tercer bloque de investigación sociocultural y sobre la calidad

de vida, que incluye temas desde la biotecnología, la inmunología o la toxicología hasta problemas sociales y de bienestar sociocultural; un cuarto gran bloque de formación de personal investigador, que es absolutamente prioritario, es el cuello de botella del sistema investigador español; y, en quinto lugar, programas de carácter singular, como la física de altas energías, como la investigación sobre el espacio o como la investigación sobre la Antártida. Esta es la organización, en grandes bloques, de lo que será el Plan Nacional, que tendremos ocasión, repito, de examinar con detenimiento, de acuerdo con lo previsto en la Ley de Fomento y Coordinación de la Investigación.

Además, los programas que integran el Plan Nacional responden mucho a cuáles son las prioridades del programa marco de investigación de la Comunidad Europea, que no se ha aprobado todavía, pero que será aprobado en un periodo brevísimo; me imagino que después de las elecciones británicas será aprobado en un periodo muy corto. Por tanto, las prioridades y los equilibrios por los que me preguntaba en su interpelación tendremos ocasión de verlos con mucho detenimiento en el marco de cada uno de estos grandes bloques, y veremos cómo, efectivamente, se busca un equilibrio entre humanidades, ciencias experimentales, tecnología, etcétera, de tal forma que cara al futuro el Plan nacional, a través de sus diferentes programas y mediante la articulación de la investigación y del desarrollo tecnológico a través del CEDETI, se convertirá en el gran instrumento de promoción de la investigación y del desarrollo, promoviendo nuestro sistema de investigación científica y técnica de manera armónica y asignando los recursos en materia de investigación y desarrollo de acuerdo con las prioridades nacionales.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Pardo): Muchas gracias, señor Ministro. ¿Turno de portavoces? (Pausa.)

Por la Agrupación del Partido Liberal, tiene la palabra el señor Luna, por un tiempo de tres minutos.

El señor DE LUNA AGUADO: Señorías, estamos de acuerdo con la exposición del señor Trías i Fargas, pero quisiéramos exponer, además de los puntos fundamentales que él ha señalado —esa excesiva burocracia, y el deber de ayudar a la juventud—, un problema que preocupa, y es la proyección de nuestra situación actual industrial, es decir, la competitividad industrial, en donde influyen los costes de producción, pero fundamentalmente la investigación y el desarrollo tecnológico.

El proceso de cambio tecnológico conlleva incorporar nuevas tecnologías en los procesos productivos, y no se puede hablar de reindustrialización sin una renovación tecnológica de nuestra industria. A este respecto hay que alabar cualquier posible esfuerzo que se pueda hacer para incrementar la presencia española, para ser más competitivos.

Una de las preguntas que no se han podido tocar ha

sido precisamente la preocupación que existe por nuestro sector de exportación en el exterior, y una de las causas es la competitividad industrial.

Actualmente el total de gastos de investigación y desarrollo respecto al producto industrial bruto representa en España, en 1986, el 0,8 por ciento, y vamos a una tasa del 1 por ciento en 1987, lo que nos va a permitir alcanzar el nivel de otros países europeos, como son Italia, Bélgica y Dinamarca. La plena integración en Europa nos obliga a ser más competitivos y cualquier esfuerzo que se haga para aprovechar esta corriente innovadora y para poder incorporar esas áreas de tecnología avanzada, como pueden ser la biotecnología, la electrónica, la informática, las telecomunicaciones, la farmacia, la química, etcétera, es decir, las que ha señalado el Ministro en el programa marco, es tremendamente positivo.

Lo que sí quisiéramos decir es que en este momento en que utilizamos unos instrumentos fundamentalmente en relación con esa investigación y desarrollo en la industria jugamos con tres elementos: el INI, el INH y el CEDETI, el cual ha tenido 20.000 millones de inversión en los últimos tres años.

Además de la acción legislativa —volvemos a insistir en ello— es necesario no sólo limitar esa burocracia y facilitar esa ayuda a la juventud, sino promover en la iniciativa privada, en la empresa y en la Universidad esa coordinación triple que se tiene que efectuar (Administración, Universidad, empresa) para que la investigación sea posible. No sabemos si esos retornos industriales que hoy en día suponen una recuperación de la inversión en este esfuerzo innovador pueden ser suficientes para poder desarrollar nuestra competitividad.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Pardo): Muchas gracias, Senador Luna.

Por el Grupo Mixto, el Senador Dorrego tiene la palabra. (*El señor Presidente ocupa la Presidencia.*)

El señor DORREGO GONZALEZ: Señor Presidente, señor Ministro, muy rápidamente quiero decir que, en principio, podemos estar de acuerdo con la exposición del señor Ministro de Educación, pero nos encontramos con el problema de que el 25 de junio de 1982, creo recordar, una Comisión especial sobre la investigación científica —y perdonen la redundancia, pero se llamaba así— daba prácticamente las mismas conclusiones que en este momento nos da el señor Ministro, lo cual quiere decir que las conclusiones no son malas. Pero la verdad es que han pasado cinco años y durante esos años, aparte de hacer un esfuerzo legislativo, y hay que reconocerlo, desde el punto de vista real de la investigación tenemos la sospecha de que poco o muy poco se ha hecho.

Le quería recordar algo que de alguna manera nos produjo una gran preocupación en las comparecencias de los Presupuestos. Cuando le preguntábamos al representante del Ministerio de Educación, creo que era el Subsecretario, qué parte de presupuesto universitario estaba generado por la propia Universidad, con recursos propios, nos

contestó que, aunque no tenía datos, era prácticamente nulo.

Parece ser que poseía la información de que alguna universidad, como la Politécnica de Madrid, sí tenía una serie de conciertos y generaba una serie de recursos, pero prácticamente el resto de las universidades no aportaban nada al presupuesto de investigación de sus propios recursos. Esto nos preocupaba porque nos parecía que esa investigación, que era uno de los tres pilares de la investigación española (Universidad, Consejo Superior, investigación privada) no estaba cumpliendo su función social, posiblemente por falta de control en esa investigación (respetamos la libertad de cátedra, pero creemos que debe haber un control de calidad y de resultados) ni estaba dando respuesta social. Estaban haciendo una investigación fragmentada, una investigación muchas veces ineficaz y una investigación que, la mayor parte de las veces, era más para cubrir un expediente que para hacer una investigación real.

Nosotros creemos que si la Universidad investigara seriamente, indiscutiblemente la empresa privada estaría dispuesta a confiar en ella y estaría promoviendo la investigación universitaria a través de los conciertos Universidad-empresa, que yo creo que existen muy pocos. Nosotros pensamos que hay que incentivarlo porque, si no logramos que el dinero que se gaste en la investigación universitaria tenga una reversión en un bien social, tengo la impresión de que estamos perdiendo el tiempo. Es verdad que, desde el punto de vista legislativo, se está intentando conseguir, pero también es verdad que con los datos que tenemos en este momento parece que en eso se ha conseguido, salvo honrosísimas excepciones, muy poco o nada.

Yo creo que es responsabilidad del Ministerio lograr que esa investigación universitaria se incardine en la sociedad y sea capaz de dar una respuesta a los problemas reales de la misma, prescindiendo de que tenga que haber investigación básica y de que tenga que haber prioridades, pero que esa investigación tenga un aprovechamiento en el mundo real, en el mundo de la empresa y en el mundo de la economía española.

Nada más. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Por el Grupo de Convergencia y Unión, tiene la palabra el señor portavoz.

El señor TRIAS I FARGAS: Señor Ministro, quiero decirle, en primer lugar, que le agradezco su intervención, que me ha tranquilizado, por lo menos respecto a un punto: que usted es consciente de la importancia del problema y que está pensando en cómo resolverlo. Esto me parece que ya es mucho.

De todas formas le digo sinceramente que desde la calle, por lo menos desde esta calle un poco ilustrada y próxima a los problemas de la sociedad, como es la Cámara Alta, la sensación que hay es que los resultados son pocos.

La investigación española, a la vista del público, no tie-

ne ese prestigio que yo pedía; no tiene esa autoridad que da el estar haciendo cosas que, sin competir con los grandes adelantados en este tema, nos ponen en una situación de discreta dignidad en materia de resultados científicos. Creo que esto es lo que debe preocupar.

Ya sé que la investigación es un tema a largo plazo, que no se va a resolver en tres días, pero creo que es obligación nuestra decirle al señor Ministro que, desde la calle, los resultados todavía no se ven.

En vista de lo que nos ha dicho el señor Ministro en cuanto a que las cuantías empiezan a ser ya importantes y que, por tanto, los recursos que dedica la sociedad española a investigación ya no son despreciables, sino que representan una cantidad insuficiente pero respetable, tenemos que pensar que lo que está ocurriendo aquí es que esta cantidad no se emplea con la productividad necesaria —también en materia de investigación existe ese tema que se llama productividad— por lo menos en términos comparativos con otros países.

En consecuencia, a mí me parece, señor Ministro, que si la línea está bien para un comienzo, falta insistir sobre ese tema para ver si la teoría se complementa con unos resultados prácticos que pueda aprovechar la sociedad española.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: ¿El señor Aguirre me estaba pidiendo la palabra en nombre del Grupo Vasco?

El señor AGUIRRE BARAÑANO: Yo la pedí hace tiempo.

El señor PRESIDENTE: No estaba yo presidiendo y se conoce que el anterior señor Presidente se ha saltado a S. S.

El señor AGUIRRE GARAÑANO: Es que no sé el orden que nos toca.

El señor PRESIDENTE: No hay ningún problema. Tiene S. S. la palabra. El orden de los factores no altera el producto.

El señor AGUIRRE BARAÑANO: A veces.

Muchas gracias, señor Presidente.

Como representante del Partido Nacionalista Vasco le agradezco al señor Ministro su intervención; y se la agradezco porque realmente este problema, por lo menos en nuestra Comunidad Autónoma, ha sido muy claro. Desde que se creó la Sociedad de Promoción y Reconversión, en el año 1980, teníamos varias cosas claras: por un lado, que había que reconducir cierto tipo de actividades y, por otro lado, que había que investigar porque el pueblo que no investigue se va a convertir en un país atrasado.

También celebro que se nos reconozca que el sistema de subvenciones es el bueno, porque cuando gobernábamos se nos criticaba que este sistema era malo. Estoy de acuerdo en que el sistema fiscal no puede solucionar el problema de la investigación, porque para eso hay que te-

ner cuotas positivas, y no teniendo cuotas positivas no se puede resolver este problema.

El señor Rojo, Secretario de Investigación, nos presentó el Plan Nacional. Estoy de acuerdo con el señor Trías Fargas en que este problema está por encima de los partidos. Nosotros el verdadero problema que encontramos, por lo menos en el País Vasco, es cómo coordinamos a la sociedad, a la empresa privada, a la Administración pública y a la Universidad. Realmente se habla mucho de la Universidad, pero ¿cómo puede investigar una Universidad que no tiene profesores que hayan investigado? A veces, cuando se habla de la Universidad parece como si internamente ya hubiera resuelto el problema. Como sugerencia, señor Ministro, lo que pediría es que este Plan Nacional que se va a llevar a cabo contemplase un problema a medio plazo, el de preparar investigadores pero para enseñarles a ser investigadores y, por otro lado, un problema a más largo plazo, el de ilusionar a toda la juventud.

Por otro lado, y para terminar, aunque en el tema de las cifras siempre tenemos discusiones, yo creo que esta cantidad no es suficiente. Ya sé que es fácil decir esto desde la oposición, pero piénsese que en otros países la inflación es muy inferior a la del nuestro y tenemos que compararnos con esos países.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: El señor portavoz del Grupo Popular tiene la palabra.

El señor CALVO CALVO: Señor Presidente, señor Ministro, el Grupo Popular comparte la preocupación que ha puesto de manifiesto el Senador Trías, y además quiere compartirla con el mismo tono de cordialidad y de asistencia en lo posible a las inquietudes del Ministerio, que nos constan. En el ambiente universitario, señor Ministro, se reconoce, puede usted estar seguro, el esfuerzo que desde la Secretaría de Estado de Investigación y Universidades está haciendo el Ministerio. De esto no hay ninguna duda. Es más, incluso se reconoce la prudencia con que se están atribuyendo medios, porque en este organismo, ciertamente enfermo que es todavía la Universidad, volcar demasiados medios podía producir una crisis peor.

Me voy a referir a un aspecto. El Senador del Grupo de Convergencia i Unió ha aludido, como medida que callará la investigación en España, a la llamada «fuga de cerebros». La fuga es una tentación; todos los que salen al extranjero y se sitúan en universidades y centros de investigación —estoy seguro que el señor Ministro conoce este tema— tienen la tentación de quedarse. Es tan confortable aquello, desde el punto de vista profesional, que no tiene nada de particular que lo hagan. Mi homenaje aquí, para equilibrar la alusión, a los que no se fugaron, a los que volvieron a España cumpliendo el compromiso que habían aceptado como becarios, de dejar aquí su esfuerzo y gracias al cual está todavía viva la investigación en nuestro país.

En cuanto a la formación de personal investigador, yo agradecería que se confirmasen las buenas impresiones

que recibimos del Secretario de Estado, en el sentido de reservar a la Universidad como primer centro de formación de personal investigador. Eso es importantísimo. Vamos a decir de una vez que el Consejo es el centro donde se reúnen ya los profesionales de la investigación y que tiene, naturalmente, la obligación, como institución, de participar en los planes. Dótese, equípese, ilusionese a la Universidad con el plan de formación de personal investigador y así recobrará vida. No puedo estar de acuerdo con todo lo que ha manifestado el Senador Dorrego en el sentido de que la investigación en la Universidad no es una actividad seria. Puedo asegurarle que la investigación que se hace en determinados centros —naturalmente la Universidad no es una entidad homogénea—, en los más acreditados, es una investigación seria. Jamás hubo, ni hay en el español un impedimento, digamos cromosómico, para la investigación. Esto está demostrado por la aceptación que tienen nuestros investigadores.

Es la sociedad la que tiene que amparar esta preocupación investigadora y acogerla como una investigación y como actividad, por qué no decirlo, un tanto selecta. Y tiene que hacerlo a través de todas las posibilidades que hay, como distinción, etcétera, hacia el personal investigador. Por ejemplo, no es una casualidad el que en este momento alrededor de la Universidad de Cambridge se haya constituido el núcleo de investigación más significado y más poderoso de Europa. La razón es bien sencilla: que lleva 800 años ininterrumpidos enseñando y, además, desde que se instituyó el Premio Nobel —por hacer la alusión que ha hecho también el profesor Trías—, sólo la Universidad de Cambridge tiene 46 de estos premios. Estoy seguro de que la Universidad de Oxford no llegará a esta tasa. Entre Cambridge y Oxford ha habido siempre una cierta rivalidad, ya lo sabe el señor Ministro, pero eso ocurre.

Yo pediría a las empresas que hicieran el esfuerzo de ocuparse seriamente de la investigación privada y no se conformasen con los ensayos. Que inviertan en investigación en la forma cooperativa, que está prevista también en todas las naciones. Inglaterra ha desarrollado el sistema de asociaciones de investigación cooperativa que dieron un gran impulso a la investigación aplicada. La empresa privada puede esperar que de la Universidad salgan investigadores, pero los temas y los trabajos los tiene que poner la empresa privada. La empresa privada nunca ha tenido, sinceramente tengo que decirlo, una preocupación auténtica por la investigación, y así estamos.

Señor Ministro, con el reconocimiento al esfuerzo que el Ministerio está haciendo en la dotación de la investigación, termino esta intervención.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Ministro de Educación y Ciencia.

El señor MINISTRO DE EDUCACION Y CIENCIA (Maravall Herrero): Tan sólo quiero precisar algunos datos sobre integración de los fondos de investigación. Efectivamente, es una de las tareas en las que está trabajando la

Administración central. Se va a ver reflejado en el presupuesto de 1988. También existe integración del esfuerzo presupuestario de las comunidades autónomas. Ahora éstas tienen la propuesta del Plan Nacional y se trata de integrar sus programas en dicho Plan, con sus propios recursos.

Segundo: universidades sin profesores. Como se ha hecho el comentario no quería que pasara sin una cierta precisión. Es evidente que las universidades no tienen los problemas resueltos, pero en estos momentos existen diez mil profesores más que en 1983 en las universidades españolas. En los dos últimos presupuestos aprobados por esta Cámara se han incrementado las asignaciones para profesorado en 7.500 millones de pesetas, y hasta 1992 se van a incrementar en 30.000 millones de pesetas de 1986, con una «ratio» final profesor-alumno de un profesor por cada 22 alumnos que, quitando Gran Bretaña —mencionada por el portavoz del Grupo Popular—, es la relación más favorable que existe en los países europeos, de acuerdo con las previsiones del Ministerio de Educación y Ciencia. Quiero decir, además, que de ese dinero un 5 por ciento se asignará a aquellos departamentos de mayor calidad investigadora, como manera de estimular la investigación y de estimular la calidad. Es decir, que habrá unos 2.500 millones de pesetas aproximadamente que irán a financiar horas para investigación.

El sector privado. He dicho formas por las que estamos procurando estimularlo, por ejemplo, a través del artículo 11. En algunas universidades representa más del 10 por ciento de su presupuesto. Pero esos presupuestos ya no los aprueba el Parlamento, los aprueban los consejos sociales de las universidades. Nosotros solamente aprobamos la transferencia que se realiza con fondos públicos. Se estimulan también a través de los consejos sociales, del CEDETI, del Consejo Asesor de la Investigación Científica y del Desarrollo Tecnológico, de la participación en programas y también, y es muy importante, con la participación del sector privado en centros públicos de investigación, en órganos públicos de investigación, tal como establece la Ley de Fomento y Coordinación de la Investigación que aquí aprobamos y que es realidad, por ejemplo, en el Centro de microelectrónica o en el Centro de biotecnología, donde hay participación del sector privado.

El tiempo es sin duda alguna importante, pero hay que dar un paso tras otro. Es decir, uno de los problemas que tuvimos con el programa de acuicultura, como saben SS. SS., es que hubo que ralentizarlo simplemente por la inexistencia de investigadores. Tuvimos que dar primero el paso de un programa específico de formación de personal investigador en este terreno. Por tanto, repito que estamos dando los pasos uno detrás de otro. El programa de formación de personal investigador tiene que ser la tarea central de las universidades; son las universidades las que lo tienen que desarrollar.

Finalmente, se ha duplicado el Fondo Nacional de Investigación desde 1983. Se han creado numerosas plazas de investigadores, y daba antes la cifra relativa al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que ha asignado desde 1983 de nuevo a un tercio de sus investigadores.

Se ha realizado un esfuerzo legislativo, y vamos a tener la ocasión de debatir muy pronto el plan nacional de investigación científica y de desarrollo tecnológico, que será el momento en que podamos efectivamente fijar las prioridades nacionales para los próximos cuatro años.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro.

El señor Quintanilla tiene la palabra.

El señor QUINTANILLA FISAC: En nombre del Grupo Socialista lo primero que quiero decir es que nos felicitamos de que una vez más se pueda plantear un pequeño debate como el que aquí ha habido a propósito de la interpelación del Senador Trías i Fargas.

A renglón seguido, resumiendo la posición de nuestro Grupo, tengo que decir que tenemos la impresión de que estamos en un momento en la historia de la política científica de nuestro país en el que quizá haya que hacer un esfuerzo para tomar conciencia de que hay que abandonar clichés del pasado. Digo esto porque el Senador Dorrego ha hecho alusión al dictamen de la Comisión especial de esta Cámara que se aprobó en 1981 y se publicó en el Boletín del Senado del año 1982, en el que se hacía un diagnóstico, por primera vez en el Parlamento español, de la situación de la investigación científica y técnica en España; ha dicho que aquel diagnóstico sigue siendo válido en estos momentos y no es cierto. Sigue siendo válido, digamos, como reflejo de la filosofía de fondo que inspira la interpelación del Senador Trías i Fargas.

Efectivamente, ha señalado lo que suelen ser, en el buen sentido de la palabra, tópicos, lugares comunes al hacer un diagnóstico de la situación de la investigación en España, pero no son lugares comunes que puedan seguir siendo mantenidos en estos momentos como un reflejo fiel de la situación actual. ¿Por qué? Precisamente —y lo digo absolutamente convencido— porque como resultado de una lenta, trabajosa y difícil actuación política en el campo de la investigación, en los últimos años la situación está cambiando (y lo ha reconocido el Senador Calvo de Alianza Popular, que creo que es un experto conocedor de estos temas) y aunque los efectos no sean extraordinariamente visibles —los efectos de una política científica nunca son visibles a corto plazo en ningún país del mundo—, sin embargo para los conocedores del tema son evidentes.

Yo resumiría la situación haciendo una síntesis de lo que ha dicho el Senador Trías i Fargas y diciendo lo que siempre se ha repetido: que en España se dedica, en primer lugar, poco dinero a la investigación. En segundo lugar, que lo que se dedica a la investigación se administra mal, porque falta coordinación y planificación en la investigación. En tercer lugar, que lo que se investiga está desconectado de las necesidades sociales, tanto desde el punto de vista del sistema productivo como desde el punto de vista de las necesidades sociales en general de servicios a la sociedad.

Yo creo que queda claro, y los que necesiten más infor-

mación pueden acudir incluso a las comparecencias muy recientes que en esta misma Cámara ha habido por parte del Secretario de Estado de Universidades e Investigación en la Comisión Mixta de Ciencia y Tecnología.

Yo creo que va quedando claro —repito—, en primer lugar, el crecimiento cuantitativo de fondos destinados a investigación con respecto al producto interior bruto y, por tanto, teniendo en cuenta también el valor de la inflación; prácticamente se puede decir que en menos de los últimos diez años se ha duplicado en España. Es un ritmo de crecimiento que el propio Senador Trías i Fargas ponía como ejemplo de países muy desarrollados, aunque en nuestro caso es mucho más fácil, puesto que el nivel inicial era muy bajo. Pero también es cierto que ritmos superiores de crecimiento en cuestiones relativas a formación de personal o en cuestiones de macroeconomía son a veces imposibles de alcanzar, porque sencillamente serían inefectivos, como muy bien acaba de señalar el señor Ministro.

En segundo lugar, en la línea de planificación, de programación y de coordinación de la investigación científica para una mayor rentabilidad de los fondos dedicados a ella, yo creo que los pasos que se han dado en los últimos años son extraordinariamente positivos, y están empezando a ser considerados ejemplares en muchos países de nuestra área política y económica. Me refiero, aunque se ha minusvalorado aquí por parte del Senador Dorrego, a la aprobación del proyecto de ley de fomento y coordinación de la administración científica y técnica, que es el instrumento legal para lograr esa coordinación y esa planificación. Me refiero también a la LRU, con sus disposiciones, que permiten una autonomía de programación de la propia investigación de las universidades, de conexión con las industrias y con las empresas a través de contratos de investigación, que lentamente están dando resultado.

Senador Trías i Fargas, yo le pondría un ejemplo conocido, porque ha salido en la prensa y pertenece a su propia Comunidad Autónoma. Recientemente he leído que la Universidad Central de Barcelona el año pasado obtuvo no sé si son 360 millones de pesetas en contratos con empresas, y que en los cuatro primeros meses de este año ya ha pasado de los 400 millones. Obviamente es muy poco todavía, pero es algo en lo que se está avanzando mundo. Puedo decirle también que recuerdo que en el año 1982, con motivo de discusión de los Presupuestos Generales del Estado, el Grupo Vasco nos decía que el Consejo Superior de Investigaciones Científicas tenía muy poca tasa de autofinanciación. Yo puedo decirle que de 1982 a 1987 se ha pasado, de una tasa de financiación prácticamente nula, a una tasa de autofinanciación que raya en estos momentos en el 20 por ciento de ingresos propios del Consejo Superior de Investigaciones Científicas por servicios de investigaciones contratadas. Yo creo que éste es un ritmo de crecimiento extraordinario e insólito en nuestro país. Pienso que se está avanzando no solamente a nivel legislativo, sino a nivel real.

El señor Ministro ha dado también datos respecto a la calidad de la investigación y su resonancia internacional,

publicaciones científicas, etcétera. Son datos conocidos, Senador Trías i Fargas.

El señor PRESIDENTE: Senador Quintanilla, ha transcurrido su tiempo.

El señor QUINTANILLA FISAC: Termino ya, señor Presidente.

Decía que son datos conocidos, Senador Trías i Fargas, que nos indican que, efectivamente, el diagnóstico de la situación, que es un poco el cliché que se ha manejado en este país, y que lo seguimos manejando a veces por inercia, es un diagnóstico que hay que revisar no tanto por que podamos autocomplacernos porque se hayan superado las dificultades del pasado, sino porque podemos ver con esperanza el futuro, puesto que creo que el sector de la investigación científica y técnica en nuestro país es uno de los sectores que está evolucionando, creciendo y prosperando, y tiene un buen futuro por delante.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

DELEGACION DE COMPETENCIA LEGISLATIVA EN LA COMISION DE ECONOMIA Y HACIENDA PARA TRAMITAR EL PROYECTO DE LEY DE TRIBUTACION DE LA COMPANIA TELEFONICA NACIONAL DE ESPAÑA

El señor PRESIDENTE: Habiéndose aplazado para el próximo Pleno la interpelación del señor Del Burgo, entramos en el punto cuarto del orden del día, delegación de competencia legislativa a la Comisión de Economía y Hacienda para tramitar el proyecto de ley de tributación de la Compañía Telefónica Nacional de España.

La Mesa del Senado, oída la junta de Portavoces, ha resuelto proponer al Pleno de la Cámara que sea tramitado con competencia legislativa plena en la Comisión. ¿Asiente la Cámara a esta propuesta de la Mesa? (*Asentimiento.*)

Delegada la competencia legislativa a la Comisión de Economía y Hacienda.

DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

— DE LA COMISION DE CONSTITUCION EN RELACION CON LA PROPOSICION DE LEY ORGANICA SOBRE FINANCIACION DE LOS PARTIDOS POLITICOS

El señor PRESIDENTE: Esta mañana, en la Junta de Portavoces, y habida cuenta de los cambios sufridos por no poderse contestar determinadas preguntas, así como la interpelación, se ha resuelto ver a continuación el dictamen de la Comisión Constitucional sobre financiación de los partidos políticos.

Señor Presidente de la Comisión Constitucional, ¿a quién se ha designado para presentar el dictamen?

La señora RUIZ-TAGLE MORALES: Ha sido designada la Senadora doña Violeta Alejandre Ubeda.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Senadora.

La señora ALEJANDRE UBEDA: Señor Presidente, señorías, me encuentro en este momento en el uso de la palabra para presentarles la tramitación, tanto en el Congreso como en el Senado, de la proposición de ley orgánica sobre financiación de los partidos políticos.

Esta proposición fue presentada ante la Mesa del Congreso de los Diputados por los Grupos Parlamentarios Socialista, Coalición Popular, Centro Democrático y Social, Mixto, Agrupación de Diputados del PDP y Agrupación de Diputados Izquierda Unida-Esquerra Catalana.

El pleno del Congreso, en su sesión del día 11 de febrero, acordó tomar en consideración la proposición de ley. La Mesa de la Cámara remitió el expediente a la Comisión Constitucional y abrió un plazo de enmiendas de quince días hábiles, que terminó el día 9 de marzo. Durante dicho plazo se presentaron quince enmiendas, distribuidas de la siguiente manera: dos enmiendas del Grupo Mixto, siete enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco y seis enmiendas del Grupo de Minoría Catalana.

La Ponencia emitió informe el día 2 de abril, y en dicho trámite no fue incorporada ninguna enmienda, si bien se introdujo alguna mejora técnica.

La Comisión Constitucional dictaminó la proposición de ley el día 28 de abril. En este trámite solamente fue aprobada una enmienda «in voce» relativa a la disposición final, y se introdujo también alguna mejora técnica.

El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día 7 de mayo, aprobó sin modificaciones el dictamen de la Comisión Constitucional.

En su tramitación en el Senado, la proposición de ley orgánica sobre financiación de los partidos políticos tuvo entrada el 14 de mayo. La Mesa del Senado remitió la proposición a la Comisión Constitucional, y abrió el correspondiente plazo para la presentación de enmiendas, que terminó el día 26 de mayo. Durante el mencionado plazo se presentaron catorce enmiendas, distribuidas del siguiente modo: el Grupo de Senadores Nacionalistas Vasco, una propuesta de veto; el mismo Grupo, cinco enmiendas; el Grupo de Coalición Popular, dos enmiendas, y el Grupo de Convergència i Unió, seis enmiendas. La propuesta de veto fue retirada antes de finalizar el plazo de enmiendas.

La Ponencia, integrada por don Emilio Alonso Sarmiento, don Aniceto Codesal Lozano, don Alfons Cucó Giner, don José Luis de los Mozos y de los Mozos y yo misma, se reunió el día 27 de mayo para realizar su informe. En éste se propuso el rechazo de todas las enmiendas presentadas.

La Comisión se reunió para dictaminar el día 4 de junio. Durante el debate fueron rechazadas todas las en-

miendas, aunque se introdujo una modificación en el preámbulo de la proposición de ley. Quedan, pues, vivas para el Pleno las trece enmiendas presentadas, agrupadas en tres votos particulares.

En definitiva, nos encontramos ante una proposición de ley de suma trascendencia, que viene a reforzar el funcionamiento de instituciones tan fundamentales para la democracia española como son los partidos políticos, y que cuenta con el apoyo de la mayoría de los grupos de esta Cámara.

Esta proposición de ley viene a cubrir un vacío evidente que existía en nuestro actual ordenamiento jurídico, en el cual se contemplaba la financiación a los partidos políticos de una forma aislada, fragmentada y sin regular, en general, los recursos económicos.

Por ello, en primer lugar, en este proyecto se regulan las fuentes de financiación; en segundo lugar, se establecen las obligaciones contables y, por último, el sistema de control a cargo del Tribunal de Cuentas.

Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, señorías.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

¿Turno a favor? (Pausa.) ¿Turno en contra? (Pausa.)
¿Señores portavoces? (Pausa.)

Tiene la palabra el señor Dorrego.

El señor DORREGO GONZALEZ: Señor Presidente, señorías, muy brevemente para manifestar nuestro apoyo a la proposición de ley, porque creemos que favorece la función de los partidos políticos, tal como constitucionalmente viene determinado; que favorece su independencia; que favorece la transparencia de los partidos políticos y que, en definitiva, con esta independencia creemos que se puede hacer mejor, a través de dichos partidos, la labor democrática que tienen encomendada.

Nada más. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Dorrego.

Tiene la palabra el señor Oliveras.

El señor OLIVERAS I TERRADAS: Gracias, señor Presidente.

El Grupo Parlamentario de Convergencia i Unió quiere fijar su posición con toda claridad ante esta proposición de ley. En este sentido, lo primero que queremos subrayar es la contradicción existente entre la exposición de motivos, que pretende justificar la necesidad de esta proposición de ley, y su desarrollo a través del articulado.

Se inicia esta exposición de motivos con una apelación al artículo 6.º de la Constitución, diciendo que el mismo «configura los partidos políticos como instrumentos fundamentales para la participación política. Existe así» —sigue diciendo el citado preámbulo— «un reconocimiento expreso en nuestra norma fundamental de la relevancia de los mismos» —de los partidos—, «en tanto son expresión del pluralismo y concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular». Así es, en efecto. Ahora bien, esa expresión del pluralismo y esa concurrencia a la formación y manifestación de la voluntad

popular, no significan otra cosa que la representación del pueblo español, y esa representación del pueblo español se materializa en las Cortes Generales, lo dice bien claramente el artículo 66 de la Constitución: «Las Cortes Generales representan al pueblo español y están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado». Es decir, ni el Congreso de los Diputados, por sí solo, ni tampoco el Senado, representan al pueblo español en su totalidad, son las Cortes Generales, Congreso y Senado, quienes ostentan conjuntamente esta representación, que se canaliza a través de los partidos políticos. (El señor Vicepresidente, Pardo Montero, ocupa la Presidencia.)

La presente proposición de ley tiene por objeto regular los recursos económicos de todo tipo de los partidos políticos y, al mismo tiempo, establece una subvención estatal anual, no condicionada, para atender a los gastos de funcionamiento ordinario; que ha de servir de apoyo a la independencia de los partidos.

Dice más la exposición de motivos: «Tal subvención se configura sin perjuicio de las establecidas en normativas específicas, en especial, por gastos electorales y subvenciones a los Grupos Parlamentarios de las Cortes Generales». Las Cortes Generales, no se olvide. Con motivo de contribuir a la financiación de los partidos, se ha establecido que la subvención se realizará en función de la presencia de cada partido en las Cortes Generales. Es decir, existe una subvención para los partidos, según su representación en el Congreso, y otra subvención para los partidos representados en el Senado.

Esta proposición de ley que nos ocupa, a pesar de esta exposición de motivos, que nos parece coherente, a la hora de establecer su articulado, decide, sin saberse las causas y motivos, subvencionar únicamente a los partidos políticos con representación en el Congreso de los Diputados. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón por la que los partidos representados en el Senado no son acreedores de esa subvención? ¿Por qué un partido, por ejemplo, que obtenga representación en el Senado, pero no en el Congreso, ha de quedar sin subvención? ¿No es acaso ese partido una representación del pluralismo y no ha concurrido también a la formación y manifestación de la voluntad popular, una parte de la cual —que podrá ser mayor o menor— representa ese partido en esta Cámara? ¿Cuál es la razón, entonces, para que ese partido, que ha tenido suficiente respaldo popular para ser un partido parlamentario, quede eliminado de la financiación?

Si esta proposición de ley se aprobase en los términos del dictamen de la Comisión y no aprovechásemos este debate en Pleno para corregir sus defectos, estaríamos aprobando una ley que, como mínimo, va a permitir una discriminación, un agravio comparativo entre aquellos partidos que obtengan representación en ambas Cámaras y aquellos que sólo obtuviesen representación en el Senado, porque así lo ha decidido la voluntad popular. No creo, señor Presidente, señorías, que esta Cámara esté dispuesta a aprobar una ley que margine a los representantes de una parte de esa voluntad popular expresada a través de los votos concedidos a cada partido. La expresión de la voluntad popular a la hora de decidir los represen-

tantes del pueblo español, son, como dice la Constitución en su artículo 66, las Cortes Generales, que están formadas, repito, por el Congreso y el Senado. Ni el Congreso por sí solo —también lo repito— es expresión omnicompreensiva de esa voluntad popular, de esa representación del pueblo español, ni lo es el Senado. Son las dos Cámaras conjuntamente, es decir, las Cortes Generales quienes expresan la totalidad de esa representación del pueblo. Por tanto, si queremos establecer una financiación de los partidos políticos en función de esa representación popular que cada uno ostenta, es necesario establecer su distribución teniendo en cuenta la totalidad de aquella representación, que no es otra que la suma de la que se tenga en el Congreso y en el Senado, o sea, en las Cortes Generales.

Que no se nos diga que se ha elegido la representación obtenida en el Congreso para hacer la distribución, porque el sistema de elección de aquella Cámara es proporcional. Esto no quiere decir nada. Tan representante del pueblo es el Diputado como el Senador. El sistema de elección no prima una representación sobre la otra ni establece diferencias de calidad. Esto, democráticamente, señorías, sería inadmisibile. La proporcionalidad se ha de tener en cuenta a la hora de repartir la cantidad destinada a financiar los partidos en función de sus escaños y en función de sus votos, y así lo establece la proposición de ley que nos ocupa. Ahora bien, la cantidad de escaños y de votos obtenidos por cada partido ha de ser necesariamente el conjunto alcanzado en las elecciones para acceder a las Cortes Generales, es decir, la suma de lo obtenido en el Congreso más lo alcanzado en el Senado. Porque, repito, señor Presidente, señorías, si no es así puede darse el caso de que partidos que hayan obtenido representación en el Senado, pero no en el Congreso, queden discriminados, ya que si, como dice el preámbulo de esta proposición de ley, esta subvención estatal se concede para atender los gastos de funcionamiento ordinario de los partidos y servir, asimismo, de apoyo a su independencia, ¿es que un partido que obtenga representación solamente en esta Cámara no tiene derecho a esta subvención para atender estos gastos de funcionamiento ordinario y apoyar su independencia?

El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Pardo): Senador Oliveras, le querría indicar que está en el turno de portavoces antes de comenzar el debate sobre el articulado. Yo creo que se está ciñendo excesivamente al artículo 3. Le rogaría que explicitara un poco más la postura de su Grupo con respecto a la proposición de ley en su globalidad.

El señor OLIVERAS I TERRADAS: Entiendo lo que me dice, señor Presidente. Esta es una objeción fundamental; las demás son objeciones técnicas. Quiero indicarle, además, que voy a retirar la enmienda número 11.

Nada más y muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Pardo): Gracias, Senador Oliveras.

En turno de portavoces, por el Grupo Popular tiene la palabra el Senador De los Mozos.

El señor DE LOS MOZOS Y DE LOS MOZOS: Con la venia, señor Presidente, señorías, nuestro Grupo no es que esté entusiasmado con esta proposición de Ley, pero comprende que tiene que haber, por esta vía, una financiación de los partidos políticos. Quizá el ideal fuera otro, pero muchas veces los ideales no son realizables como uno piensa.

Nuestro Grupo apoya sustancialmente esta proposición de ley, con la reserva a la que se referirán posteriormente las enmiendas que hemos presentado y que vamos a defender en este Pleno.

Nada más, señor Presidente, muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Pardo): Gracias, Senador De los Mozos.

Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el Senador Cucó.

El señor CUCO GINER: Muchas gracias, señor Presidente. Con toda brevedad para decir que la exposición de motivos de la proposición de ley, a nuestro juicio enmarca perfectamente el sentido y el ámbito de la misma, que no es otro que el de reunir en una sola disposición una serie de normas, por otra parte dispersas en nuestro ordenamiento jurídico, y tratar de financiar de una manera clara y transparente los partidos políticos, que son un instrumento esencial de nuestra democracia.

Creemos que es una proposición de ley equilibrada. Me ha sorprendido —y no voy a dejar de decirlo en este primer trámite— la exposición de mi buen amigo el Senador Oliveras, que ha entrado en una serie de temas, como el papel del Senado, creo que halagando un tanto el sentido corporativo de la Cámara, que por otra parte estoy seguro que no existe, pero ya tendremos ocasión, a lo largo del debate del articulado, de poderlo discutir pausada y reflexivamente, como corresponde a esta Cámara.

Nada más, señor Presidente. Espero que todos estos temas, evidentemente de gran envergadura, que el Senador Oliveras ha puesto de relieve, tendremos oportunidad de debatirlos seguidamente.

Nada más y muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Pardo): Muchas gracias, Senador Cucó.

Si bien es costumbre que el preámbulo quede normalmente para debatirlo al final de los proyectos o proposiciones de ley, comoquiera que se ha pasado a la Presidencia del Senado una enmienda transaccional a dicho preámbulo, vamos, en primer lugar, a votarlo. Para ello, le ruego al señor Secretario dé lectura a la enmienda transaccional que ha sido presentada.

El señor SECRETARIO TERCERO (Aguilera Bermúdez): Gracias, señor Presidente.

Los portavoces de los grupos abajo firmantes, al amparo del artículo 125 del Reglamento de la Cámara, solici-

tan de V. E. la inclusión de la siguiente enmienda transaccional a la proposición de Ley orgánica sobre financiación de los partidos políticos.

Enmienda transaccional al preámbulo del dictamen de la Comisión. En el párrafo segundo del dictamen, donde dice «establecer la normativa básica», debe decir, al igual que en el texto remitido por el Congreso, «establecer el marco normativo básico».

Firman los representantes de los diversos grupos parlamentarios.

El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Pardo): Entiendo que la Cámara está de acuerdo en aceptar esta enmienda transaccional, ya que está firmada por todos los grupos parlamentarios. Esto significa —a efectos de que quede constancia en el «Diario de Sesiones»— que el texto remitido por el Congreso de los Diputados queda inalterado en cuanto al que se apruebe definitivamente por este Senado por lo que respecta al preámbulo, y, por tanto, no se entiende introducida enmienda alguna. Insisto que es en lo que respecta al preámbulo, porque SS. SS. son muy libres de introducir las enmiendas que quieran posteriormente al articulado. Queda inalterado, repito, de acuerdo con el texto remitido por el Congreso de los Diputados.

Vamos a someter a votación dicho preámbulo de esta proposición de ley, de acuerdo con la modificación introducida ahora por esta enmienda transaccional que ha sido admitida y que significa volver al texto remitido por el Congreso de los Diputados.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 182; a favor, 179; en contra, uno; abstenciones, dos.

El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Pardo): Queda aprobado el preámbulo de esta ley en la forma indicada.

Entramos seguidamente, tal como se quedó esta mañana en la Junta de Portavoces, en el estudio de los artículos y enmiendas formuladas al articulado de esta ley, estructurado su debate por Títulos, con cinco minutos para cada enmienda y un turno único posterior, en contra, de diez minutos al Grupo que se oponga.

Tiene en primer lugar la palabra para la defensa de su enmienda número 2, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, el representante del Grupo, Senador Pozueta.

El señor POZUETA MATE: Muchas gracias, señor Presidente.

Al hilo de los argumentos utilizados por el Portavoz del Grupo Convergencia i Unió en su anterior intervención y fundamentándonos en razones de pluralismo político, observamos también, aparte de la especie de agravio comparativo que él ha apuntado respecto a las dos Cámaras, otro que tiene relación directa con la Comunidad Autónoma Vasca. Efectivamente, como SS. SS. conocen, la especificidad de nuestro Estatuto hace que en el sistema

electoral la Comunidad Autónoma vasca tenga posibilidades plenas de organizar las elecciones a las instituciones históricas del país.

Desde esta perspectiva, nos parece que en el proyecto de ley se ha omitido incluir la financiación a aquellos partidos políticos que obtengan representación en estas instituciones históricas. Se puede dar el caso, señorías, de que partidos políticos de un ámbito muy concreto, en este caso ya no regional, sino puntualmente históricos —Guipúzcoa, Vizcaya, Alava— tuvieran acceso a las Juntas Generales, obtuvieran escaños, estuvieran legalmente constituidos, contribuyeran a ese amplio abanico de participación política de partidos políticos, y, sin embargo, no obtuvieran escaños o no tuvieran presencia, incluso participación, en otro tipo determinado de elecciones. Estaríamos indudablemente ejerciendo una injusticia con ellos al no subvencionar estas elecciones —insisto— que son específicas de nuestra Comunidad Autónoma.

Por lo tanto, nosotros a través de nuestra enmienda, lo que queremos es incorporar este aspecto que el legislador —por olvido, quiero pensar— no ha incluido, y, así, cuando se habla de que se va a subvencionar a los Grupos Parlamentarios de las Cámaras y se va a subvencionar también a los Grupos Parlamentarios de las Asambleas Autonómicas, nosotros lo que pedimos es que también se subvencionen a aquellos grupos políticos que tengan representación en los territorios históricos.

Nada más y muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Pardo): Muchas gracias, Senador Pozueta.

Para la defensa de su enmienda número 9, tiene la palabra el representante de Convergencia i Unió, Senador Oliveras.

El señor OLIVERAS I TERRADAS: Gracias, señor Presidente.

En el artículo 2 de esta proposición de ley de financiación de los partidos políticos se señalan los recursos de dichos partidos, señalándose cuáles son los procedentes de la financiación pública y cuáles son los procedentes de la financiación privada.

Nuestro Grupo considera que en los recursos procedentes de la financiación pública se debería introducir un nuevo párrafo que sería el d), de carácter genérico, en el que se especifique no un recurso más, sino un concepto más. Diría así: «Las demás subvenciones que perciban, de acuerdo con la Ley, de cualesquiera entidades integrantes del sector público».

No pretendemos con ello una nueva subvención; pretendemos que en la relación de recursos procedentes de la financiación pública se incluyan unas subvenciones que los partidos políticos no sólo pueden percibir, sino que perciben ya, y si fueran ignoradas y olvidadas en esa relación las subvenciones que proceden de los grupos provinciales o municipales, entonces habría una dificultad de contabilización, porque, si no están reconocidas aquí, señorías, ¿cómo van a contabilizarlas?

Nosotros entendemos, por consiguiente, que este con-

Título I
(artículos 1
y 2)

cepto genérico, esa letra d) del número 1 de este artículo 2 contribuiría a clarificar el proyecto de ley y por eso solicitamos que sea introducido.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Pardo): Muchas gracias, Senador Oliveras.

Para un turno en contra tiene la palabra el Senador Cucó por tiempo de diez minutos.

El señor CUCO GINER: Señor Presidente, señorías, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, para oponerme tanto a la enmienda número 2, presentada por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, como también a la enmienda número 9, presentada por el Grupo Parlamentario de Convergencia i Unió.

Voy a referirme, en primer lugar, a la enmienda número 2, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, que ha defendido, en todo caso restrictivamente, el Senador Pozueta, ya que la enmienda escrita comprendía otros aspectos que el Portavoz del Grupo Nacionalista Vasco no ha puesto de relieve. Me parece, sin embargo, procesalmente mucho más completo referirme a la enmienda escrita, porque esto me permitirá, por otra parte, hacer referencia a la filosofía del proyecto de Ley, tal como la entiende el Grupo Parlamentario Socialista.

La enmienda del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos tenía tres aspectos fundamentales a mi juicio. Un primer apartado, la letra a), por el cual los Senadores Nacionalistas Vascos pedían que constase expresamente la subvención a los Parlamentos autónomos en los procesos electorales.

Nosotros entendemos que este punto está ya perfectamente cubierto y defendido por la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, y en este sentido nos parece que es una evidencia que las Comunidades Autónomas reciben ya subvenciones para sufragar sus propios gastos electorales.

Como saben SS. SS., y precisamente para clarificar esta cuestión, fue iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista en el trámite en el Congreso de los Diputados cambiar la redacción original del proyecto de Ley en el sentido de modificar un término. Cuando en el proyecto de Ley primitivo se hablaba de subvenciones estatales, los socialistas en el trámite del Congreso postulamos que se hablase de subvenciones públicas, porque incidía precisamente en este aspecto. El tema fue, por otra parte, aprobado por unanimidad.

Con esta puntualización nosotros creemos que se aclara de manera suficiente la posible ambigüedad inicial que podía concurrir en el proyecto de Ley y, en definitiva, creemos que la actual redacción del texto tal y como ha llegado al Senado incluye ya que los Senadores Nacionalistas Vascos demandan a través de la enmienda que discutimos ahora.

Hay otro aspecto, el apartado b), al que se ha referido expresamente el Senador Pozueta, relativo a las subvenciones a los Grupos Parlamentarios, y se pretende incluir, junto a los Grupos Parlamentarios de las Cortes Genera-

les, del Congreso y del Senado y de las Asambleas Autonómicas, también a los de las Juntas Generales de los denominados territorios históricos.

El Grupo Parlamentario Socialista, creo que debo decirlo con toda claridad, va a oponerse a esta pretensión. ¿Por qué? Porque entendemos que no deben incorporarse a este proyecto de Ley subvenciones que procedan de entidades locales, sea cual sea su grado de elección, los ayuntamientos, las diputaciones o, como sugiere la enmienda de los Senadores Nacionalistas Vascos, las propias Juntas Generales de los territorios históricos.

Mi Grupo Parlamentario va a mantener, señor Presidente, tanto en este apartado como en otros puntos que inmediatamente hemos de ver, la letra d) de esta enmienda 2, y también el incluido en la enmienda número 9, del Grupo Parlamentario de Convergencia i Unió, un criterio que nos parece el más coherente y adecuado. Este criterio es que la financiación de los partidos políticos debe estar en todo momento sometida al control parlamentario y a través de los Presupuestos Generales del Estado. Esta es la filosofía que el Grupo Parlamentario Socialista va a defender. Por esto, evidentemente, somos contrarios a contemplar mecanismos que puedan sustraer la financiación de los partidos políticos del estricto control parlamentario.

Es por esta filosofía política, a nuestro juicio perfectamente coherente, y con la que, claro está, se podrá estar de acuerdo o no, esta es otra cuestión, por lo que tampoco vamos a admitir el apartado d) de la misma enmienda número 2, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos. En dicho apartado d) se contempla la posibilidad de que las propias Comunidades Autónomas puedan también conceder subvenciones a los partidos, en orden —se dice textualmente— a financiar sus actividades ordinarias. Ello, obviamente, conduce a una duplicidad de financiación, que la hurta al control parlamentario, y a ello debemos oponernos.

Por idénticos principios políticos nos vamos a oponer a la enmienda número 9 presentada por el Grupo Parlamentario de Convergencia i Unió, por la que se pretende que los partidos puedan recibir subvenciones, textualmente, «de cualesquiera entidades integrantes del sector público». Ello equivaldría, obviamente, a que los grupos municipales o provinciales puedan recibir subvenciones de las citadas corporaciones. Tal posibilidad entra claramente en colisión con la filosofía política que he expuesto hace un instante. Podría contribuir, a nuestro juicio, a crear graves problemas en ayuntamientos y en diputaciones y a desarrollar peligrosos casuismos que complicasen de manera ostensible el panorama político.

Por todas estas razones, el Grupo Parlamentario Socialista va a oponerse a ambas enmiendas y se va a atener al texto original del proyecto de Ley.

Nada más y muchas gracias, señor Presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Pardo): Muchas gracias, Senador Cucó. ¿Señores Portavoces? (Pausa.) El Senador Pozueta, en representación de Senadores

Nacionalistas Vascos, tiene la palabra por tiempo de cinco minutos.

El señor POZUETA MATE: Para fijar nuestra posición en base precisamente a argumentos esgrimidos por el Portavoz socialista.

Hemos escuchado, señor Presidente, que se puede producir, si se aceptan nuestros planteamientos, una duplicidad en la financiación. Efectivamente, puede ser así, pero también se puede producir un castigo, una no financiación a partidos de ámbito regionalista. Y yo quiero hacer alusión, porque es muy reciente, de plena actualidad, a los propios resultados de estas últimas elecciones, en los que hemos visto que en todo el ámbito estatal la aparición de partidos regionalistas, por tanto de ámbito muy concreto, han conseguido representaciones importantes en el ámbito de sus propios Parlamentos autónomos. Y en muchos de los casos pueden ser partidos que no tengan representación ni en el Congreso ni en el Senado, incluso diría más, que no entra dentro de sus proyectos participar en esas elecciones. Por tanto, son partidos políticos constituidos exactamente igual que los demás. Están contribuyendo a eso que dice la Constitución en los artículos 1.º y 6.º, y tienen derecho a una financiación como tales partidos políticos, ya que me refiero tanto en función de los resultados que han tenido, ya que, evidentemente, cómo se les va a negar la financiación cuando han conseguido escaños; eso está claro, está en toda la legislación de las Comunidades Autónomas. Pero es que nos olvidamos de un aspecto y de una vertiente importante del tema. Son partidos políticos con una actividad muy concreta geográficamente, pero con una actividad política tan respetable como la de cualquier otro, y en base precisamente a esto viene la razón de que nosotros digamos que también hay que incorporar el hecho de los territorios históricos. Y he apuntado en mi primera intervención, defendiendo la enmienda, el hecho posible de que haya un partido de ámbito puramente de territorio histórico, que ahí termine su actividad política, pero está desarrollando una actividad política que está amparada por la Constitución; no sólo amparada sino reconocida. Por tanto, no puede haber duplicidad. Sí puede haber, efectivamente, duplicidad de financiación, pero, señores, será porque esos partidos también tienen una actividad política concreta y desarrollan en un ámbito geográfico concreto esa actividad, pero el hecho indiscutible es que puede haber partidos con ámbito específico que no van a tener representación en ningún otro ámbito y que también, insisto, están desarrollando su función. Por tanto, nos parece que si hay que salvar el espíritu de la Ley, eso hay que tenerlo en cuenta y reflejarlo de alguna forma, salvo que entendamos que con lo que se dice en el preámbulo, que por otra parte se ha modificado y tengo que decir que a nuestro Grupo le gustaba más la rectificación que se hizo en Ponencia o en Comisión, ha de interpretarse que ésta es una Ley básica: «La presente Ley tiene así como objetivo fundamental el establecer la normativa básica que discipline...», etcétera. Si tenemos que entender que esto va a tener un carácter de Ley básica y que, por

tanto, es susceptible de desarrollo posterior en el resto de las Comunidades Autónomas, no hemos dicho nada y nos damos por conformes. Por tanto, emplazo de una forma directa al Portavoz socialista para que nos aclare la cuestión, y en función de una u otra razón nos dé la respuesta.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Pardo): Muchas gracias, Senador Pozueta.

Tiene la palabra el Portavoz del Grupo Socialista, señor Cucó.

El señor CUCO GINER: Muchas gracias, señor Presidente, y también con toda brevedad, porque creo que he expuesto con suficiente claridad cuáles son los criterios que han guiado fundamentalmente al Grupo Parlamentario Socialista por lo que a esta ley respecta. Comprendo también los comentarios de mi colega el Senador Pozueta. Debo decirle que nosotros enfocamos esta ley como una ley eminentemente técnica, no como una ley que esté predisponiendo a una concepción global de los partidos políticos.

La financiación de los partidos políticos se puede resolver de muchas formas y si hiciéramos un estudio comparado con lo que ocurre en otros países europeos, podríamos encontrarnos con modelos muy distintos. Nosotros, en la situación actual de la política y de la democracia española, enfatizamos mucho más la transparencia y el carácter unívoco de la financiación.

Es, evidentemente, una ley, y creo que lo dije en Comisión con palabras similares, que no está hecha «sub specie aeternitatis». Vamos a ver qué ocurre, si la filosofía que defiende el Senador Pozueta y su Grupo Parlamentario es quizá más efectiva que la nuestra, y, en todo caso, dentro de unos cuantos años, cuando tengamos perspectiva suficiente para ver si la ley funciona o no, nosotros mantenemos nuestros criterios políticos, evidentemente, estaríamos dispuestos a una hipotética remodelación de estos principios. Hoy por hoy, los argumentos que nos da el Senador Pozueta no nos han llegado a convencer y, por tanto, vamos a mantener unos criterios de entrada, los nuestros, que creemos que son más operativos.

Nada más y muchas gracias, señor Presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Pardo): Muchas gracias, señor Cucó.

Vamos a votar. En primer lugar votamos la enmienda número 2, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos. Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 173; a favor, 19; en contra, 150; abstenciones, cuatro.

El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Pardo): Queda rechazada.

Votamos seguidamente la enmienda número 9, del Grupo Parlamentario de Convergencia i Unió.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 175; a favor, 19; en contra, 131; abstenciones, 25.

El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Pardo): Queda rechazada.

Votamos los artículos 1 y 2, de este Título, agrupadamente. *(El señor Oliveras i Terradas pide la palabra.)* Tiene la palabra el señor Oliveras.

El señor OLIVERAS I TERRADAS: Señor Presidente, era para pedir votación respecto del artículo 2, pero creo que me he precipitado.

El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Pardo): Si quiere votación separada, se puede hacer.

El señor OLIVERAS I TERRADAS: Sí, votación separada.

El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Pardo): ¿El Senador Pozueta me pedía la palabra? *(Pausa.)* ¿Era para lo mismo? *(Asentimiento.)*

Votamos en primer lugar el artículo 1.
Se inicia la votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 172; a favor, 168; en contra, tres; abstenciones, una.

El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Pardo): Queda aprobado el artículo 1.

Votamos seguidamente el artículo 2, conforme al texto del dictamen.

Se inicia la votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 176; a favor, 156; en contra, 18; abstenciones dos.

El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Pardo): Queda aprobado el artículo 2.^o

Título II
(artículos 3
a 8)

Pasamos al Título II que contiene los artículos 3 a 8. En primer lugar, para la defensa de su enmienda número 3, tiene la palabra por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos el representante del Grupo, Senador Pozueta.

El señor POZUETA MATE: Muchas gracias, señor Presidente. Esta enmienda es consecuencia de la que habíamos presentado al artículo anterior, y, por tanto, donde se regula la financiación pública, nosotros incorporábamos el hecho autonómico y el hecho de las Diputaciones Forales, en este caso de los territorios históricos.

También hay otro aspecto, que ha sido apuntado por el portavoz del Grupo de Convergencia i Unió, respecto a la nueva consideración del Senado como parte de las Cortes Generales. *(El señor Vicepresidente, Arespacochaga y Felipe, ocupa la Presidencia.)*

Al objeto de no repetir conceptos, me remito a lo que dicho Portavoz ha expresado desde la tribuna.
Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Arespacochaga y Felipe): Señor Pozueta, ¿ha defendido conjuntamente las enmiendas 3 y 4? *(Asentimiento.)*

Entonces, para la defensa del voto particular del Grupo de Convergencia i Unió, enmiendas números 10 y 12, puesto que la 11 ha sido retirada, tiene la palabra el señor Oliveras.

El señor OLIVERAS I TERRADAS: Señor Presidente, quisiera referirme a mi anterior intervención, porque el turno de Portavoces sirve para fijar la posición del Grupo, y como nuestra objeción más importante a esta ley era precisamente este tema, para enfatizar, hemos explicado nuestro punto de vista precisamente en ese turno de Portavoces.

Para no ser redundante repetiré, señorías, que si no corregimos este aspecto podría darse el caso de que partidos que hayan obtenido representación en esta Cámara, pero no en el Congreso, queden discriminados. Se podría dar incluso el caso de que hubiera partidos que tuvieran una representación, por la voluntad del pueblo, más importante en esta Cámara que en el Congreso de los Diputados. Por eso nosotros entendemos que la distribución más justa de la subvención procedente de financiación pública tendría que ser contemplando el total de ambas Cámaras. Para no ser redundante voy a dar por terminada mi defensa en lo que se refiere a la enmienda número 9.

La enmienda número 11, como ha dicho muy bien S. S., ha quedado retirada.

Respecto a la enmienda número 12 lo que pretendemos es suprimir el artículo 8 del citado texto del proyecto de Ley. El artículo 8 dice: «Sólo podrán resultar comprometidos por los partidos políticos hasta el 25 por ciento de los ingresos procedentes de la financiación pública contemplada en los apartados b) y c) del artículo 2.1 para el pago de anualidades de amortización de operaciones de crédito».

Nosotros con esta enmienda pretendemos suprimir este artículo, porque creemos que si los partidos reciben una subvención de financiación pública, no deben establecerse limitaciones a su libertad de contratación y deben hacer con ello lo que legítimamente mejor les parezca. Digo legítimamente porque precisamente esta ley contempla una fiscalización a través del Tribunal de Cuentas y si han hecho un mal uso de estos recursos de financiación pública, ya lo señalará dicho Tribunal de Cuentas. Por esta razón nosotros entendemos que este artículo debería ser suprimido.

Nada más. Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Arespacochaga y Felipe): Gracias, señor Oliveras.

Entiendo, señor Pozueta, que la número 4 estaba también defendida. ¿Es así? *(Asentimiento.)*

Muchas gracias.

Habiendo terminado las enmiendas, pasamos al turno en contra, para el que tiene la palabra el Senador Alonso.

El señor ALONSO SARMIENTO: Muchas gracias, señor Presidente.

Señorías, antes de entrar en la defensa del texto del proyecto y en la oposición a las enmiendas presentadas, permítanme por esta vez la pequeña vanidad de felicitar me por dos acontecimientos que se producen en este momento en esta Cámara: uno, porque es la primera vez que tengo el honor de dirigirme al Pleno de esta Cámara y, por tanto, quiero aprovechar la ocasión para ponerme a la disposición de todas SS. SS. sin excepción; el segundo, porque llegamos hoy al final de una tarea cuya responsabilidad, trabajo, pero también honor de iniciar me cupo ya hace creo que poco más de cinco años, es decir, cuando todavía en este país gobernaba la extinta Unión de Centro Democrático y el Partido Socialista estaba en la oposición, que fue la tarea de dotar a esta nación, a este Estado, de una ley de financiación de partidos políticos que cubriera toda una serie de lagunas legales ante las cuales nos encontrábamos y que a veces ponían a los responsables de las finanzas de los partidos en situaciones muy difíciles por no saber qué era y qué no era lo que se podía hacer, qué era y lo que no era legal.

Perdónenme esta digresión. Paso ya al tema concreto que me ha traído a esta tribuna para oponerme a las diversas enmiendas presentadas. Quiero empezar por contestar a la enmienda número 3 del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos. Como no es mi intención ni mi estilo repetir argumentos que ya se hayan utilizado, porque nunca me creo con mayor capacidad para argumentar mejor lo que otros ya han dicho, en muchos de los temas me remito a lo que ha manifestado ya el Senador Cucó. Quiero insistir en el argumento de que, a nuestro entender, las subvenciones deben obedecer a la representación más auténtica y clara de los partidos políticos. Nosotros afirmamos y sostenemos que la representación que refleja de un modo más claro la implantación de un partido político a lo largo de todo el Estado es la representación proporcional que se produce en el Congreso de los Diputados. Para nada discutimos la representación de esta Cámara y, por supuesto, no vamos a intentar ceder a lo que consideramos un halago a un posible corporativismo. Para nosotros no está en cuestión en ningún momento ni en un ápice la representación de esta Cámara, pero creemos que las subvenciones tienen que estar en correspondencia con la auténtica representación electoral de los partidos a lo largo de todo el Estado y esa representación se da genuinamente con mucha más certeza en la representación del Congreso de los Diputados.

Por otra parte, aunque quizá sea tema de menor enjundia, yo creo que en su enmienda el tipo de asignación de cantidades que ustedes proponen cuando menos es confuso, porque se propone que la asignación se divida en tres partes, que deben pagarse con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, tres cantidades iguales, de las cuales una de ellas se distribuirá en proporción al número de escaños, pero no dice nada de las otras dos; nada se dice, por lo que la redacción de la enmienda cuando menos es confusa.

Créanme, señorías, que la asignación que propone el texto del proyecto es la mejor, es la más proporcional y, por lo tanto, es la que más favorece a los partidos con me-

nos representación popular. El reparto de un tercio por escaño y dos tercios por voto en el Congreso de los Diputados anula prácticamente en su totalidad los efectos de la ley D'Hondt, por lo cual en este momento el partido mayoritario, el Partido Socialista, es el más perjudicado. Del sistema que venimos aplicando hasta este momento a la asignación de subvenciones que propone el proyecto de ley, hay una merma de posibilidades para el Partido Socialista, pero mantenemos este tipo de asignación porque, repito, consideramos que es la que más favorece a la proporcionalidad y, por lo tanto, a la auténtica representación de los partidos a lo largo de todo el Estado.

Contestando al señor Oliveras, del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, tengo que darle necesariamente en parte la misma contestación que he dado a la enmienda anterior, y debo insistir en que la representación proporcional del Congreso para nosotros es la que refleja más auténticamente la implantación electoral de los partidos, y en ningún momento, repito, ni queremos, ni pretendemos ni pasa por nuestra imaginación poner en duda la representación de esta Cámara, que es tan digna, tan cierta y tan contundente como la que hay en el Congreso de los Diputados.

Créanme, señorías, que hemos hecho números. Al partido Socialista le favorecería también que contabilizáramos nuestra representación en el Senado a la hora de asignar la subvención, pero estamos completamente convencidos y sostendremos siempre que guiarse por intereses partidistas a la hora de legislar será siempre un error.

Contestando a la enmienda número 11, del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, he de decir, señorías, que no la entiendo, porque...

El señor VICEPRESIDENTE (Arespacochaga y Felipe): La enmienda número 11 ha sido retirada.

El señor ALONSO SARMIENTO: Perdón, señor Presidente; es verdad.

Contestando a la enmienda número 12, en donde se pretende suprimir el artículo 8, ya dijimos en Comisión —y quiero repetirlo aquí— que pensamos que el esfuerzo que hace el Estado en este proyecto de ley para sanear las economías de los partidos políticos merece, diría más: exige ciertas contrapartidas por parte de los mismos, y una de ellas, a nuestro entender, es la de la austeridad y el rigor en la política de gasto por parte de los partidos políticos; política de gasto que está necesariamente conectada y muy ligada a la política crediticia, es decir, a la capacidad de endeudamiento de los partidos, y lo que se pretende aquí es exactamente eso: limitar las posibilidades de endeudamiento de los mismos.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Arespacochaga y Felipe): Muchas gracias, Senador Alonso.

Habiendo sido consumido el turno en contra, procede la intervención de los señores portavoces.

Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra el señor Pozueta.

El señor POZUETA MATE: Gracias, señor Presidente.

Nos parece un poco exagerado traducir la voluntad popular por un halago corporativista, en principio. Ahí lo dejamos.

En segundo lugar, no se nos dice nada por parte del Grupo mayoritario respecto a estos partidos regionalistas. El proyecto de ley dice que hay dos clases de financiación: una, como consecuencia de los resultados electorales. Está claro, si son de ámbito de comunidad autónoma, tendrán la financiación en función del número de escaños y también del número de votos que han sacado en su propio Parlamento. También hay subvenciones a los partidos por el hecho de serlo, y si no tienen escaño en el Congreso, señorías, estos partidos son de segunda división; por lo visto no están contribuyendo, como dice la Constitución, al juego democrático, etcétera.

Desde nuestra posición, queremos insistir en que la enmienda que presentamos al artículo 3 es correcta. Puede derivarse de ella un cierto confusiónismo porque hablamos en el apartado a) de que hay tres cantidades iguales; una se distribuirá así y no hablamos de las otras dos, pero si las mencionamos en el apartado 2, en el que decimos que dos partes se distribuirán en función al número de votos obtenidos por partido. Por tanto, podía haber ocurrido aquí un lapsus por parte del enmendante, pero lo que está claro es cuál es nuestro espíritu y nuestro concepto respecto a esta financiación de partidos políticos.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Arespacochaga y Felipe): Gracias, Senador Pozueta.

Por Convergencia i Unió, el Senador Oliveras tiene la palabra.

El señor OLIVERAS I TERRADAS: Muchas gracias, señor Presidente.

Cuando el Senador Alonso ha rebatido nuestra postura de que debía tenerse en cuenta a esta Cámara para establecer los criterios de distribución de las subvenciones públicas, ha afirmado que se mantenía en lo establecido en la proposición de ley por entender que ello permitía una distribución, y ha utilizado estas palabras tanto al referirse a la enmienda de Senadores Nacionalistas Vascos como a la de Convergencia i Unió, más auténtica y clara. *(El señor Presidente ocupa la Presidencia.)*

Debo decirle al Senador Alonso que por lo menos esa distribución carecería de la condición de auténtica, porque nada impide que en un momento dado, y en este momento se da, un partido esté representado en esta Cámara por voluntad popular, me refiero a la Asamblea Mayorera, y no está representado en el Congreso de los Diputados. En este caso y en todos los que en el futuro puedan darse de partidos que obtengan representación por voluntad popular en esta Cámara y no estén en la otra, la Ley no permite darles esa subvención para garantizar su independencia y su financiación ordinaria; en este caso la

distribución tendrá muchas condiciones, será fácil, será clara, pero no tendrá la condición de auténtica.

Nada más. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Por el Grupo Socialista, el señor Alonso tiene la palabra.

El señor ALONSO SARMIENTO: Muy brevemente, porque no quiero empezar yendo en contra de lo que acabo de decir, es decir, volviendo a insistir en argumentos ya manejados. Me remito a lo que ha dicho el señor Cucó, a lo que he dicho yo hace unos minutos.

Señor Pozueta, no me atrevo a interpretar cuál es su espíritu o el de su Grupo; es un terreno en el que no me muevo con absoluta seguridad; lo único que sé es lo que está escrito, y lo que está escrito repito que está confuso.

En la Comisión ya discrepamos, señor Oliveras, en cuanto a este tema y seguimos discrepando. Nosotros pensamos que la representación mayoritaria del Senado no refleja con tanta exactitud como la proporcionalidad del Congreso de los Diputados la auténtica implantación de un partido. Creemos que refleja mejor la realidad de la implantación de un partido la representación en el Congreso y a ella nos atenemos.

Repito, no es una distribución, un factor de asignación que a nosotros nos favorezca, pero creemos que es mejor para el juego futuro de los partidos políticos en este país.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Alonso. Votamos la enmienda número 3, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos.

Se inicia la votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 169; a favor, 19; en contra, 150.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 4, del mismo Grupo Parlamentario.

Se inicia la votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 154; a favor, 16; en contra, 138.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 10, de Convergencia i Unió.

Se inicia la votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 169; a favor, 15; en contra, 138; abstenciones, 16.

El señor PRESIDENTE: Rechazada.

La enmienda número 11 ha sido retirada.

Votamos la enmienda 12, de Convergencia i Unió. Se inicia la votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 172; a favor, 14; en contra, 137; abstenciones, 21.

El señor PRESIDENTE: Rechazada.
Votamos el Título II.
El señor Oliveras tiene la palabra.

El señor OLIVERAS I TERRADAS: Señor Presidente, solicitaría votación separada de los artículos 3.º y 8.º. Pueden votarse agrupadamente los restantes.

El señor PRESIDENTE: Votamos los artículos 3.º y 8.º.
Se inicia la votación. *(Pausa.)*
El señor De los Mozos tiene la palabra.

El señor DE LOS MOZOS Y DE LOS MOZOS: Señor Presidente, no se han discutido las enmiendas 7 y 8, de Coalición Popular, a este título.

El señor PRESIDENTE: Se suspende la votación mientras dilucidamos este problema. *(Pausa.)*

No figuraban en el guión que tiene la Presidencia. Ahora las discutiremos.

En cualquier caso, no obsta a discutir las enmiendas el votar... Sí, claro, obsta el votar el texto del dictamen.

Entonces, se anula la votación de los artículos 3.º y 8.º y vamos a entrar en la discusión de las enmiendas.

De todas formas, yo rogaría a los señores portavoces que para estos casos me llamaran la atención sobre el hecho un poco antes de iniciar las votaciones.

Vamos a discutir, entonces, las enmiendas 7 y 8, del Grupo Popular.

Tiene la palabra el señor portavoz.

El señor DE LOS MOZOS Y DE LOS MOZOS: Con la venia, señor Presidente, señorías. Muy brevemente para defender las enmiendas de mi Grupo número 7 y 8 a esta proposición de ley de financiación de los partidos políticos.

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.

El señor DE LOS MOZOS Y DE LOS MOZOS: Muy brevemente, porque la cuestión que nos obliga a esta enmienda es casi de tipo gramatical. El texto de la proposición habla de que las subvenciones se distribuirán en función al número de escaños y de votos obtenidos por cada partido político en las últimas elecciones, etcétera —dice el párrafo 1 del apartado 2 del artículo 31—; y el párrafo 2 vuelve a decir lo mismo, ya que establece que una de ellas se distribuirá en proporción al número de escaños obtenidos por cada partido.

Entonces, como nuestro Grupo es una Coalición y lo ha sido mucho más grande, resulta que lo que queremos introducir es la expresión «cada partido o coalición», lo cual está de acuerdo con lo dispuesto en la Ley General Electoral, que no solamente previene partidos y coaliciones, sino también federaciones. Entonces, parece lógico que a

la hora de establecer la financiación se tenga en cuenta estas distintas posibilidades.

Bien es verdad que se podría entender que cuando se habla de partidos se refiere uno a partidos, a coaliciones, a federaciones o a cualquiera otra especie de esta misma naturaleza. Pero siempre se suele decir que «las cuentas claras y el chocolate espeso». Si estamos en una ley de financiación tenemos que ajustarnos a las palabras para que se puedan entender claramente las palabras sin dar lugar a torticeras interpretaciones a que estas palabras pueden dar lugar.

Como ven, señorías, nuestra enmienda es una enmienda que casi casi se parece un poco a aquella famosa logomaquia que aparece en «Los intereses creados», cuando habla de «si digo, digo, pero si en vez de decir digo, digo, digo Diego». En la famosa obra de Jacinto Benavente «Los intereses creados» se planteaba una cuestión de intereses a propósito del amor entre Arlequín y Colombina. Siempre hay un pierrot que llora, porque, al final, Colombina se va con Arlequín.

Aquí no se trata de una comedia de amor en el marco de la antigua farsa, sino que se trata de otra cosa; de una comedia de confianza en el marco de la vida política.

Por esa razón solicitamos el consenso de esta Cámara —bien poco es lo que pedimos, y ayer mismo el Ministro de Relaciones con las Cortes hablaba del consenso—, ya que sería una ocasión oportuna para expresar este consenso, al menos de las fuerzas mayoritarias de la Cámara.

Nada más, señor Presidente; señorías, muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. ¿Turno en contra? *(Pausa.)*

Tiene la palabra el señor Alonso.

El señor ALONSO SARMIENTO: Señor Presidente, pienso que el Senador señor De los Mozos tiene un alto concepto de la Gramática. Ha dicho que su enmienda es casi de orden gramatical. Pues, repito, debe tener una concepción muy amplia de hasta dónde puede llegar la Gramática.

Nosotros creemos que el tema de las coaliciones en este país es más una comedia de desamor que una comedia de amor, pero en serio.

En serio nosotros pensamos que hoy tratamos aquí de una proposición de ley sobre financiación de los partidos políticos; repito: de partidos políticos, y entendemos, igualmente, que la problemática de las coaliciones ya la contempla el proyecto cuando en este propio artículo, en el párrafo 1 del artículo 3, se remite a la Ley Orgánica 5/1985, de Régimen Electoral General, en la que se contempla el tema de las coaliciones.

Nosotros pensamos que la redacción del proyecto es una solución suficiente y mejor que la que propone el Grupo enmendante, porque introducir, abrir aquí la casuística de las coaliciones, la casuística que se puede dar en el devenir de la vida de las coaliciones, quizá no nos bastara, quizá no fuera suficiente incorporando un título más; quizá no fuera suficiente.

Repito que creemos que el texto del proyecto es sufi-

ciente —hago hincapié en eso— y mejor, más claro.
Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: ¿Turno de portavoces? (Pausa.)
Tiene la palabra la señora Palacio.

La señora DE PALACIO DEL VALLE LERSUNDI: Gracias, señor Presidente. El texto es posible que sea más claro, pero yo no lo creo así, ya que el texto obliga inmediatamente a una interpretación.

Estamos en el texto, y el texto todavía es susceptible de enmendarse y de modificarse.

Si pone partido y se hace una interpretación literal del texto, y pone partido y no coalición, a la hora de distribuir los escaños, la financiación por escaños, no hay ninguna dificultad; puesto que cada partido y cada escaño normalmente tiene nombres y apellidos y tiene un partido concreto al cual está adscrito el Diputado correspondiente. El problema es cuando hablamos de votos, porque no siempre concurren partidos, sino que concurren federaciones de partidos o coaliciones.

Lo único que pretende este Grupo al plantear esta enmienda es que por una interpretación restrictiva o literal del texto se pueda decir sólo partidos. Indudablemente, cuando se presentan coaliciones ningún partido tiene ningún voto, los tiene la coalición. Es decir, si aquí se nos dice que donde la Ley dice partidos se va a entender, a la hora de aplicarla —y estoy hablando de la cuestión de los votos— partidos o coaliciones o federaciones de partidos, según hayan concurrido, nuestro Grupo, aun cuando no entiende por qué no decirlo claramente en la Ley, si esa es la intención de la Ley, no tendrá ningún problema. Pero queremos que quede claro que mediante una interpretación literal de la Ley no se vaya a dejar fuera de esta financiación, en los dos tercios que se corresponde a los votos obtenidos, a todas aquellas formaciones que hayan concurrido bajo forma de coalición o de federación de partidos.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Palacio.

Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Alonso.

El señor ALONSO SARMIENTO: Señor Presidente, también este tema fue tocado, creo recordar, en Comisión.

Nosotros pensamos que las coaliciones, las futuras y posibles coaliciones, si es que en el futuro las hay, y en vista de la experiencia de los últimos tiempos, ya que de amor y desamor hemos venido hablando, deberían redactar «a priori» muy concretamente sus estipulaciones matrimoniales con vistas a un posible divorcio.

Quiero con esto decir que ante notario deben fijar las coaliciones muy concretamente, o los partidos que van a formar esa coalición, en qué porcentaje van a participar y con relación a ese porcentaje se estipularán los votos atribuidos y, por tanto, la subvención atribuida. Creemos que no se va a dar —no se viene dando, de hecho— una interpretación tan estricta que no permita atender la situación presente en la que nos estamos moviendo.

Repito, creo que ésa es la salida, y no abrir aquí una casuística, porque nosotros por lo menos no tenemos experiencia, no sabemos cuáles van a ser las experiencias de futuro de las coaliciones. Creemos que debe concretarse antes; aquellos partidos que todavía tengan ánimo para presentarse en el futuro en coalición, que estipulen muy bien las condiciones de la coalición antes de la confrontación electoral.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Vamos a votar la enmienda número 7, del Grupo de Coalición Popular.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 177; a favor, 33; en contra, 136; abstenciones, ocho.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 8, de Coalición Popular.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 182; a favor, 35; en contra, 138; abstenciones, nueve.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos los artículos 3 y 8.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 183; a favor, 134; en contra, tres; abstenciones, 36.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.

Votamos los artículos 4, 5, 6 y 7.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación; dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 180; a favor, 174; en contra, dos; abstenciones, cuatro.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.

Título III, enmienda número 13 de Convergencia i Unió. Título III

Tiene la palabra el señor portavoz.

El señor OLIVERAS I TERRADAS: Gracias, señor Presidente.

Nuestra enmienda número 13 propone la supresión del apartado segundo del artículo 9. El artículo 9, como saben SS. SS., regula las obligaciones contables de los partidos. En el número uno establece que los partidos políticos deberán llevar registros contables detallados que permitan en todo momento conocer su situación financiera y el cumplimiento de las obligaciones previstas en la presente Ley. Este apartado nos parece muy adecuado, pero el segundo, cuya supresión proponemos, no nos parece tan acertado, porque introduce conceptos genéricos, como, por ejemplo, «principios de contabilidad general

aceptados», y pasa a continuación a toda una serie de ca- suística de detalles.

Nosotros creemos que los partidos tienen que llevar una contabilidad transparente e inteligible, pero sin limitar su capacidad autoorganizativa de llevarla como les parezca. También en este caso insistimos en que es al Tribunal de Cuentas a quien corresponde efectuar la fiscalización y, por tanto, no creemos necesario someterla a un sistema reglamentista y riguroso.

Nada más, muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias. ¿Turno en contra? *(Pausa.)* Tiene la palabra la señora Alejandre.

La señora ALEJANDRE UBEDA: Siento, señor Oliveras, no estar de acuerdo en absoluto con su planteamiento en cuanto a que el apartado segundo limita la capacidad de autogestión en el control del dinero de los partidos políticos. Los conceptos que usted dice que pueden inducir a error, como conceptos generales de contabilidad, son absolutamente claros y los conocen hasta en las empresas más pequeñas en las que son exigibles. *(Rumores.)*

Yo pienso que hablar de inventario anual, hablar de la cuenta de ingresos, de la cuenta de gastos y, en el último apartado, de las operaciones de capital no induce a ningún error, sino todo lo contrario. Están sustentando los conceptos básicos y claros que en esta Ley proponemos, que son: seriedad, rigor y transparencia. Por tanto, señor Oliveras, siento que nuestro Grupo no esté de acuerdo con su planteamiento. Intentando articular de esta manera la contabilidad proponemos dar una homogeneidad, ponernos también de acuerdo a la hora de rendir cuentas ante el Tribunal de Cuentas para que en ningún momento... *(Murmullos.)*

El señor PRESIDENTE: ¡Silencio, por favor!

La señora ALEJANDRE UBEDA: Gracias, señor Presidente.

Para que en ningún momento existan las lagunas con las que actualmente nos encontramos en el actual sistema de ordenación de la financiación de los partidos políticos.

El señor PRESIDENTE: ¿Turno de portavoces? *(Pausa.)* Tiene la palabra el señor Oliveras.

El señor OLIVERAS I TERRADAS: Es evidente que no vamos a ponernos de acuerdo. Nosotros entendemos que es de rigor esa transparencia y por eso nos gusta tanto. Ya resulta precisamente del apartado número uno, que dice que los partidos deberán llevar registros contables detallados que permitan en todo momento conocer su situación financiera y el cumplimiento de las obligaciones previstas en la presente Ley. Por consiguiente, entendemos que todo lo demás que aparece en este artículo es ab-

solutamente inútil en virtud de esta acertada redacción del apartado uno.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. Tiene la palabra la señora Alejandre.

La señora ALEJANDRE UBEDA: Muy brevemente, señor Presidente.

Estamos absolutamente de acuerdo en lo bien redactado que está el artículo 9 en su número 1. Estamos convencidos de lo que decimos, señoría, en el apartado 2 del artículo 9: No es otra cosa sino garantizar que el artículo 9, apartado 1, se cumpla. Por tanto, entendemos que no está de más, sino que justamente va a garantizar eso en lo que coincidimos su Grupo y el nuestro respecto a lo bien que está redactado el artículo 9 en su apartado 1.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Votamos la enmienda número 13, del Grupo Convergencia y Unión.

Se inicia la votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 176; a favor, 14; en contra, 134; abstenciones, 28.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos el artículo 9.º, que comprende todo el Título III.

Se inicia la votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 174; a favor, 161; en contra, diez; abstenciones, tres.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Para defender la enmienda número 5 al Título IV, tiene la palabra el portavoz del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos. Título IV

El señor POZUETA MATE: Gracias, señor Presidente. Esta enmienda responde a planteamientos anteriores y es congruente con enmiendas referentes a artículos precedentes, por tanto, ahorro a la Cámara que oiga repetir los mismos argumentos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

¿Turno en contra? *(Pausa.)*

Tiene la palabra el señor Cucó.

El señor CUCO GINER: Señor Presidente, si es posible, para el orden del debate, preferiría contestar agrupadamente a las enmiendas presentadas.

El señor PRESIDENTE: En eso es en lo que habíamos quedado en la reunión de portavoces.

Tiene la palabra el señor Oliveras, para defender la enmienda número 14.

El señor OLIVERAS I TERRADAS: Nuestra enmienda número 14 propone la modificación del redactado del artículo 11.

El artículo 11 tiene por objeto la fiscalización interna de la actividad económico-financiera de los partidos políticos, atribuyéndola exclusivamente al Tribunal de Cuentas. Nosotros aceptamos esta atribución, pero pensamos que se extiende demasiado, que va más allá de los límites atribuidos a la función específica encomendada por nuestra Constitución al Tribunal de Cuentas.

Efectivamente, nuestra Constitución, en el artículo 136, establece que el Tribunal de Cuentas es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado, así como del sector público. Y, coherentemente con este precepto constitucional, pensamos que la fiscalización debería limitarse a lo que perciban los partidos políticos procedente de las subvenciones de los fondos públicos.

Nuestra enmienda pretende esta adaptación del Tribunal de Cuentas a sus límites constitucionales, respetando la específica personalidad de los partidos políticos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Cucó.

El señor CUCO GINER: Muchas gracias, señor Presidente.

Para oponernos tanto a la enmienda número 5, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, como a la enmienda número 14, del Grupo Convergencia i Unió.

Prefería defenderlas agrupadamente, señor Presidente, porque entendía que ambas tenían un sentido similar y un tanto complementario. Ambas enmiendas pretenden adaptar la actuación del Tribunal de Cuentas a sus límites constitucionales. Incluso en algunos trámites del debate se ha llegado a utilizar la expresión de que este artículo concretamente podría rozar la inconstitucionalidad. Nosotros queremos —porque entendemos que éste es un tema muy importante— avanzarnos a este argumento que no se ha dicho aquí en este trámite del Pleno del Senado con tal rotundidad, pero que creemos que está en la base de la argumentación que ambos Grupos parlamentarios defienden.

Yo creo que este tema tiene dos aspectos. Por una parte, parece ser que nadie está en contra de que la transparencia y el rigor que aquí todos hemos invocado esta tarde se ponga de manifiesto a través del mecanismo idóneo que tiene nuestro ordenamiento jurídico, que es el Tribunal de Cuentas. Esto parece que no se pone en cuestión. Lo que sí se pone en cuestión por parte de los dos Grupos parlamentarios, es el ámbito de actuación del Tribunal de Cuentas.

Nosotros creemos que no solamente la redacción de este artículo no es inconstitucional, no roza, en absoluto, la inconstitucionalidad, sino que creemos también que el Tribunal de Cuentas no ejerce, en definitiva, su competencia solamente en el ámbito público, sino que también la ejerce en el ámbito privado, en tanto que las entidades pri-

vadas se relacionan con recursos públicos y en tanto tengan relación con los intereses generales. Esto nos parece obvio.

Es claro, a nuestro juicio, que los partidos políticos y su funcionamiento, transparente por supuesto, son de interés general y, en este sentido, entendemos claramente que el Tribunal de Cuentas ha de cumplir la función de auditor externo de los partidos políticos. Y esto, señorías, es una actuación que no es novedosa entre nosotros; esta actuación ya se lleva a cabo de forma absolutamente constitucional, y sin que nadie nunca la haya puesto en cuestión, a través de una ley tan importante como la Ley Orgánica del Régimen Electoral.

Yo invitaría a SS. SS. a que releyesen la Ley Electoral, que viesen los artículos 132 y siguientes de esa Ley donde la función de audición externa de los partidos políticos está absolutamente asumida por el Tribunal de Cuentas. Al Tribunal de Cuentas le dan cuenta —y perdón por la redundancia, que quizá no lo sea tanto— las juntas electorales, que informan de su actividad fiscalizadora (artículo 132). En el artículo 133 el Tribunal de Cuentas recibe —leo textualmente la Ley— una contabilidad detallada y documentada de los respectivos ingresos y gastos electorales de los partidos, y no solamente de los partidos sino incluso —dice la Ley—, nadie ha puesto jamás en tela de juicio, que en los mismos términos, las entidades financieras de cualquier tipo que hubieran concedido crédito a aquellos partidos y asociaciones mencionados en el párrafo primero, envían noticia detallada de los mismos al Tribunal de Cuentas dentro del párrafo referido de aquel apartado, y en los mismos términos deben informar al Tribunal de Cuentas las empresas que hubieran facturado con aquellos partidos y asociaciones, etcétera. Creo que invocar la función de rozamiento de inconstitucionalidad por parte de este Tribunal, señorías, es estricta y pura fantasía. Creo haberlo demostrado claramente con la remisión a la Ley Orgánica de Régimen Electoral General.

Nada más y muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cucó. ¿Turno de portavoces? (Pausa.)

Tiene la palabra el señor Pozueta.

El señor POZUETA MATE: Gracias, señor Presidente.

Nuestro Grupo está totalmente de acuerdo en todo lo referente a las subvenciones derivadas de los planes electorales o de los gastos electorales.

Por tanto, este portavoz no ve a qué viene la referencia a la Ley General Electoral, porque en eso estamos de acuerdo. En nuestra enmienda, al menos, estamos diciendo que corresponderá exclusivamente al Tribunal de Cuentas la fiscalización; por tanto, no hace falta ninguna aportación más, porque estamos de acuerdo. Lo que sí decimos nosotros es que tienen que tener un tratamiento distinto las otras subvenciones, las subvenciones no reguladas en la presente Ley, que no son las derivadas de gastos electorales, sino las otras, las que corresponden a los partidos políticos en función de que desarrollen una acti-

vidad política. Por tanto, entiendo que está de más esa alusión larga a la Ley de Régimen Electoral General. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: ¿Algún otro portavoz? (Pausa.) Tiene la palabra el señor Cucó.

El señor CUCO GINER: Muy brevemente, señor Presidente. Entiendo que esa alusión, al menos en mi argumentación era perfectamente procedente. En todo caso, para la enmienda que ha defendido el Senador Oliveras, ya que el Senador Pozueta no ha defendido la suya, y como no había argumentos no podía haber contraargumentos.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Votamos la enmienda número 5 del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 182; a favor, 16; en contra, 166.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda número 5.

A continuación, votamos la enmienda número 14, de Convergencia y Unión.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 186; a favor, 15; en contra, 134; abstenciones, 37.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos el artículo 10.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 182; a favor, 174; en contra, dos; abstenciones, seis.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Votamos el artículo 11.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 182; a favor, 168; en contra, 13; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Tiene la palabra el portavoz del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, para defender la enmienda número 6, de inclusión de una disposición adicional.

El señor POZUETA MATE: Gracias, señor Presidente.

Ayer, en esta Cámara, conmemoramos el décimo aniversario de las primeras elecciones democráticas en el Estado. Esto quiere decir que partidos políticos, por lo menos desde 1976-77 estaban ya funcionando. Algunos otros, evidentemente muchos más años. El Partido Socialista es

centenario y nosotros esperamos llegar pronto a cumplir esos cien años, pero evidentemente en función de eso no voy a hacer aquí ninguna petición ni mención a ningún agravio histórico por esta longevidad, sino todo lo contrario.

Es evidente que los partidos políticos se han movido a lo largo de estos diez años en una situación económica difícil, en muchos casos con deudas prácticamente imposibles de asumir. De ahí que nosotros hayamos propuesto una disposición adicional en la que se recoja precisamente una solución a este problema específico.

Evidentemente no hemos tenido la osadía de señalar cuál sería el procedimiento, pero sí quisiéramos que al menos se tuviera en cuenta y hemos dejado al arbitrio del Gobierno que se habilitaran los mecanismos de financiación pública estatal para resolver precisamente estos problemas.

Con este carácter genérico lo hemos dejado así, pero nos parecía que una ley de financiación de partidos políticos, que se plantea después de diez años de actividad legal de los mismos, debería tener en cuenta la situación pasada, que en algunos casos es dramática y que por parte del Gobierno socialista tenía que haber estado asumida.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

¿Turno en contra? (Pausa.)

Tiene la palabra el señor Alonso.

El señor ALONSO SARMIENTO: Señor Presidente, señor Pozueta, creo que pocas personas en España conocen como yo lo que han significado estos diez años para los partidos políticos en el terreno económico y en sus dificultades, teniendo a lo largo de estos años que suplir muchas deficiencias que no hubiera correspondido suplir a los partidos políticos, sino que se debían a una falta de infraestructura del Estado, a veces por una carencia de práctica democrática durante muchos años.

Es verdad que se habló mucho entre pasillos, cuando se redactaba el borrador de esta proposición de ley, de la posibilidad de encontrar una vía para que el Estado asumiera, si no la totalidad, parte de las deudas históricas de los partidos políticos, pero al avanzar en esas negociaciones entramos en terrenos bastante complicados. ¿Cómo se calculaban esas deudas? ¿Eran las deudas de los partidos todavía vigentes, o había que contemplar las de algunos partidos que ya no actuaban, pero que tenían una carga de deuda muy importante? De cuáles se hacía cargo el Estado, de cuáles no; cómo se justificaban esas deudas; qué documentación había que aportar para justificar las deudas; qué documentación se podía conseguir teniendo en cuenta que muchas deudas provenían ya, como usted muy bien ha dicho, del año 1977, la primera campaña, del año 1979, de las segundas elecciones. Y al final —yo no sé si es la solución mejor— se decidió por una solución que consistía, como en la proposición de ley figura, en incrementar la subvención anual de forma muy importante a los partidos políticos, y que así, los partidos políticos podrían, por una parte, seguir atendiendo

sus gastos ordinarios, sus inversiones necesarias del día a día, pudiendo dedicar ese incremento de la subvención a amortizar la deuda histórica de esos diez años en una negociación con todos los acreedores.

Nosotros pensamos que el esfuerzo que hace el Estado en esta ley es importante, y que por hoy esta ley es suficiente. Pero, como ha dicho al principio de este debate mi compañero el señor Cucó, no tenemos la pretensión de que sea una ley para la eternidad. Si mi conocimiento de esa parte de la historia no me falla, es la primera vez en la historia de España que hay una ley de financiación de partidos políticos, y sería mucha pretensión por nuestra parte haber acertado al cien por cien a la primera tacada. Si en el próximo futuro se demuestra que algunos artículos, que algunos puntos de esta ley merecen una modificación del tema de las coaliciones o algún otro tema, nuestro Grupo parlamentario estará en todo momento, en función de la experiencia histórica que sobre esta ley se produzca en los próximos meses o en los próximos años, nuestro Grupo estará, repito, dispuesto en todo momento a volver sobre el particular, a dialogar y a negociar para ver de introducir los cambios que la experiencia aconsejara introducir. Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. ¿Turno de portavoces? (Pausa.) El señor Pozueta tiene la palabra.

El señor POZUETA MATE: Muchas gracias, señor Presidente. Nuestro Grupo lamenta que por cuestiones de procedimiento no se hayan llevado adelante esas negociaciones que al parecer se han celebrado entre pasillos. Creo que las cuestiones de procedimiento se resuelven, y más cuando se trata de solventar casos como éstos, que son preocupantes. Nuestro Grupo lamenta que este tema haya quedado abandonado, porque, repito, creo que la situación de muchos partidos políticos es realmente difícil, grave. Nuestro Grupo reconoce el esfuerzo que se ha hecho, evidentemente, con este proyecto de ley, y ahí está, insisto, ese aspecto histórico de estos diez últimos años, en las condiciones que se empezó cuando había que crear infraestructura, pues es cuando realmente los partidos tienen que hacer un mayor esfuerzo, porque la máquina de escribir, las mesas y las sillas que se compraron en 1977 siguen funcionando. La inversión importante fue la primera, y creo que con buena voluntad —y en este caso no hubiera habido problemas ideológicos ni de ningún otro tipo que hubieran enfrentado a las fuerzas políticas—, creo que se podría haber buscado una solución realmente buena o que fuera asumida por todos. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. ¿Algún otro portavoz? (Pausa.) Tiene la palabra el señor Alonso.

El señor ALONSO SARMIENTO: Sólo un momento. Señor Pozueta, yo también lamento mucho no haber podido descargar sobre el Estado unas deudas que, como he dicho en mi intervención, creo que, objetivamente, no son propias de los partidos políticos, que en un Estado con

historia democrática mucha de esa infraestructura hubiera sido el Estado quien la hubiera puesto a disposición de los partidos, y no hubieran sido los partidos quienes hubieran tenido que articularla de su propio peculio. Pero la situación era complicada y, señor Pozueta, también el tiempo es oro. Con la ley que hoy se aprueba, en la que hay un incremento de subvención importante, haciendo números a lo mejor también hay una parte de rentabilidad de haber esperado a soluciones que en el papel hubieran podido parecer más tajantes, pero que se hubieran demorado en los próximos meses. Nosotros hemos optado por esa vía y repito lo que hemos dicho antes: estaremos abiertos al diálogo en función de la experiencia histórica que esta ley tenga en los próximos meses. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Votamos la enmienda.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 189; a favor, 14; en contra, 174; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Pasamos a votar la disposición final, que no tiene enmiendas.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 182; a favor, 177; en contra, dos; abstenciones, tres.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada, y también aprobado definitivamente por las Cortes Generales este proyecto de ley que será sometido a la sanción de Su Majestad el Rey.

PROPOSICION DE REFORMA DEL ARTICULO 182 DEL REGLAMENTO DEL SENADO

El señor PRESIDENTE: Entramos en el punto, antes quinto, ahora sexto, por el cambio que ha habido del orden del día: Proposición de reforma del artículo 182 del Reglamento del Senado.

Procede la defensa de esta proposición de reforma por el Grupo que la ha presentado, Coalición Popular.

Tiene la palabra el señor Bosque Hita.

El señor BOSQUE HITA: Señor Presidente, señorías, el Grupo Parlamentario Popular ha presentado esta proposición de reforma de nuestro artículo 182 del Reglamento de la Cámara, al objeto de que en él pueda contemplarse con carácter reglamentario la periodicidad de los debates sobre el Estado de las Autonomías, periodicidad que nosotros pedimos que sea anual.

Nos parece que hablar de la trascendencia del fenómeno político autonómico en nuestro país y derivar de ahí

la necesidad de esta clase de debates está fuera de lugar, porque creo que consta a todas SS. SS. Pero es tan trascendental la realización del debate que en momentos importantes de esta Cámara la totalidad de los Grupos Parlamentarios en ella representados tomaron acuerdos unánimes sobre el particular.

El tema de la prioridad nos parece de especial relevancia por el hecho de que hasta el momento, al no tener esta Cámara las competencias que la Constitución para ella exige, de Cámara de representación territorial, porque no se han desarrollado los procedimientos adecuados para ello, está produciendo que en estos instantes, y hasta el momento, desde que se inició la creación del Estado de las Autonomías, el diálogo, la coordinación, la cooperación y el entendimiento entre el Gobierno central y las autonomías se hace por procedimientos absolutamente bilaterales sin que de ninguna de las maneras exista algo que permita que todas las autonomías, el propio Gobierno y todos los Grupos parlamentarios puedan participar de manera adecuada para que, con los criterios contrastados de todos, se puedan encontrar por todos las mejores soluciones de coordinación, de solidaridad y de justicia para todos.

Parece absolutamente necesario que por este motivo pueda existir un procedimiento regulado donde se pueda valorar y ponderar la realización de todo el proceso autonómico, y no con carácter circunstancial, sino de manera permanente y reglada.

La revisión de los efectos políticos, económicos, administrativos, etcétera, que todo el proceso autonómico produce sobre la totalidad de la vida de la sociedad española, parece que hace necesario que estos contrastes y estas consideraciones se hagan de tal manera que sea posible ir acomodando las conductas de todos aquellos que tengan representación o responsabilidad al conocimiento de lo que el resto de los implicados pueda adoptar.

Se hace preciso un intercambio de conceptos sobre las políticas autonómicas, o sobre la financiación de las comunidades autónomas. Hay leyes como la LOFCA, o como la del Fondo de Compensación, que requieren un tratamiento, un contraste de criterios y, en último término, requieren incluso hasta la exigencia, suficientemente apoyada por el mayor número posible de quienes se sientan afectados por ella, de los artículos que, aun a pesar de los años en vigor, por ejemplo de la LOFCA, no han sido puestos en vigor.

Es importante el contraste de criterios entre el Gobierno, entre los Grupos parlamentarios representados en esta Cámara y entre las comunidades autónomas, porque no podemos olvidar que ésta es la Cámara de representación territorial y que se compone precisamente de Senadores que proceden de todas y cada una de las provincias, pero también, en gran medida, de todas y cada una de las comunidades autónomas elegidas precisamente por los Parlamentos autónomos.

Todo ello quiere decir que esta Cámara tiene por sí misma, por la manera de ser compuesta y de ser elegida, unas facultades de representación autonómica que están en

verdadera conexión incluso con las propias mayorías de cada una de las autonomías.

Por tanto, negar que esta Cámara tiene capacidad para, de alguna manera, traer y representar los criterios y las opiniones de los grupos políticos dominantes en cada una de las autonomías y del resto de los partidos y de las minorías que las componen, sería absolutamente fuera de lugar.

Por eso, de esta manera, veríamos en esta Cámara un marco adecuado, globalizado, de discusión donde el Gobierno, los representantes de las comunidades autónomas y los representantes de Grupos parlamentarios con representación en la Cámara tenían la oportunidad real de hacer toda esta serie de operaciones sin necesidad de dar más pasos inmediatamente puesto que, de otra forma, también podríamos llegar a situaciones de representación territorial más amplia. Pero eso posiblemente requiriese un mayor esfuerzo por parte de cuantos estamos constituyendo los Grupos parlamentarios y quizá estos Grupos y los partidos que los componen no tengan en estos instantes la preparación o la disposición adecuada para hacer frente con mayor valentía a este problema de representación.

Por eso nosotros entendemos que hay distintas maneras de realizar este tema. Nuestra propuesta es bien simple: que este debate anual sobre el Estado de las Autonomías tenga la trascendencia, la forma, la organización y los procedimientos que, en cada momento, la Mesa de esta Cámara establezca para ello. Pero sí nos parece que, inicialmente al menos, debían de tenerse en consideración dos grandes aspectos que creemos son de trascendencia especial. Anualmente, la Mesa de las Cortes estará capacitada para adecuar formas, procedimientos, e incluso contenidos de acuerdo con las propias declaraciones que el Gobierno haga en cada caso. Estos dos grandes campos en los cuales creemos que debieran realizarse los primeros debates son aquellos que van alrededor de la ponderación y valoración de la situación autonómica, de acuerdo con todo cuanto hasta el momento ha ocurrido desde cada uno de los debates anteriores hasta el presente. Sería la revisión de los efectos de la aplicación de la Constitución y de los distintos estatutos de autonomía, a todos y cada uno de los casos que se presentan; sería, incluso, la lectura conjunta y constante entre todos los Grupos Parlamentarios, entre los representantes de las autonomías y entre el Gobierno central, del Título VIII de la Constitución y de los propios estatutos de autonomía de todas y cada una de las comunidades; sería el análisis de las relaciones entre el Gobierno, entre las Comunidades Autónomas y entre la Comunidad Económica Europea, nuevo planteamiento que nos surge como consecuencia de nuestro ingreso en el Mercado Común, con toda la implicación de problemas en relación con competencias y en acomodación de legislaciones y de determinaciones y normativas internas de cada Comunidad o incluso generales del propio Estado.

Nos parece que, junto a todo ello, no podemos olvidar tampoco que debe de contemplarse la intencionalidad po-

lítica de cara a un futuro inmediato, hasta el próximo debate que pueda ser convocado, de todos y cada uno de los elementos que deben de componer este debate que, como ya hemos dicho, son el propio Gobierno, los representantes de las comunidades autónomas y los grupos parlamentarios de esta Cámara. Desde este punto de vista, de acuerdo con lo que entiendan en cada instante que debe de ser el progreso en el desarrollo y acomodación de todas y cada una de nuestras comunidades autónomas, podemos utilizar el procedimiento establecido en nuestro Reglamento, para las aportaciones de las distintas mociones que, como consecuencia del debate, puedan ir surgiendo.

Alrededor de todo ello nos atreveríamos a decir que está, por ejemplo, el hecho de que establezcamos vías de comunicación constante entre estos tres elementos que son Comunidades Autónomas, Gobierno y los distintos partidos políticos.

Nos parece que por este procedimiento se pueden promover vías efectivas que no se queden en un mero pronunciamiento de palabras alrededor de la consecución de ese principio establecido por la Constitución, que es el de la solidaridad. Entendemos que esta serie de debates periódicos puede ser el vehículo adecuado para cualquier clase de iniciativa, cualquier clase de impulso respecto a conferencias, convenios, revisión o reconsideración de competencias, etcétera.

La posición que se ha mantenido sobre este debate ha sido siempre la de que era necesario que se realizase. Ha habido en algún instante alguna clase de diferencias con algún Grupo, concretamente con el mayoritario, en cuanto a la oportunidad de la realización del último debate sobre el estado de las comunidades autónomas. Pero yo tengo que recordar a SS. SS. que cuando mi Grupo Parlamentario en el mes de octubre del pasado año pedía al Presidente de esta Cámara la realización de un debate anual sobre el estado de las autonomías, se obtuvo una contestación que es la que en estos momentos nos da la esperanza de que nuestra propuesta, de que esta proposición puede ser aceptada. Aquella respuesta era que el último acuerdo que había adoptado la misma en la legislatura anterior había sido precisamente el de establecer de forma ya segura un debate anual sobre el estado de las autonomías. Teniendo en cuenta la semejanza de composición de esta Cámara en aquella legislatura y en ésta, la semejanza de composición de la Mesa y la identidad del propio Presidente, parece que tiene la misma valoración que tuvo en el momento de su pronunciamiento.

Por todo ello es por lo que pedimos a todas SS. SS. que voten esta proposición de modificación del artículo 182 de nuestro Reglamento, al objeto de que se pueda establecer regularmente el debate anual sobre el estado de las autonomías.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bosque.

Para turno en contra, tiene la palabra la señora Rubiales.

La señora RUBIALES TORREJON: Señor Presidente,

señorías, voy a oponerme, en nombre del Grupo Socialista, a la proposición no de ley presentada por el Grupo de Coalición Popular, en torno a la modificación del artículo 182 del Reglamento. Las razones de la oposición estarían en torno al tema formal de la vía de modificación y en torno al tema de fondo, al tema de contenido. La verdad es que nos parece sorprendente, no el tema de la modificación del Reglamento, sino el tema de fondo y de contenido, lo que pretende obtener el Grupo Popular, que es el que se celebre el debate sobre el estado de las autonomías y la seguridad en torno al mismo. El señor Bosque Hita sabe, al igual que otros miembros de la Comisión de Economía, que han apoyado y han contribuido con su esfuerzo y con su trabajo al Plan elaborado por esta Comisión, que el debate sobre el estado de las autonomías tiene todo tipo de seguridad para SS. SS., desde el punto de vista político y jurídico, porque hay acuerdo unánime de la Comisión para que se celebre en esta Cámara después de ser aprobado el Plan de trabajo por esta Comisión.

La seguridad de SS. SS. en torno al debate del estado de las autonomías, nos parece a este Grupo Parlamentario que sería la razón de fondo, sobre la que después incidiré. No tiene razón de ser entrar a debatir la modificación del Reglamento para conseguir este objetivo concreto.

Podría haberse planteado la consecución de otro tipo de objetivos y en este caso se podría haber debatido el tema. Pero en cuanto al objetivo planteado por el Grupo Popular, al Grupo Socialista le parece que es obvio que no existe ahora mismo ningún tipo de inseguridad ni ningún tipo de no convencimiento por parte del Grupo Popular ni de ningún otro grupo de la Cámara —porque han estado trabajando, repito, con seriedad en el plan de trabajo de autonomías—, de que el debate sobre el estado de las autonomías se va a producir en esta Cámara. Tiene unas fechas determinadas y previstas por esta Comisión y un tipo de trabajo que nos parece serio y razonable.

Por tanto, habría dos tipos de problemas o de temas planteados con respecto a la proposición no de ley que se nos trae a discusión y a debate en esta Cámara. Uno, sería el de abordar las reformas del reglamento del Senado. Nos parece, desde un punto de vista político y técnico, que las reformas parciales o puntuales de normas de carácter institucional o de carácter organizativo, no se deben afrontar desde una visión parcial, porque las reformas parciales de todo tipo de normas que tienen una base sustantiva de organización o de autoorganización de elementos plurales y diversos, las reformas parciales que vengán a introducir aspectos que nos puedan parecer sustantivos o menos sustantivos, siempre son defectuosas y determinarán el que no se aborde el tema en profundidad.

Se puede empezar a hablar desde la composición plural de esta Cámara sobre el tema de la reforma del Reglamento, pero no nos parece que ni en este tema ni en cualquier otro que afecte a una norma sustantiva, institucional u organizativa, se puedan ir introduciendo reformas parciales, ni en materia de leyes orgánicas, ni en materia de reformas de código o de normas jurídicas que tengan una base que necesite de su pervivencia y de su man-

tenimiento y que las reformas parciales no vienen sino a introducir inseguridad y elementos que no convienen a la buena marcha de las instituciones.

Recordaré a SS. SS. simplemente que para pasar del Reglamento provisional de esta Cámara al Reglamento definitivo se tardaron cinco años. Tener en cuenta los diferentes intereses, que además son cambiantes según las circunstancias políticas de cada coyuntura electoral o de cada coyuntura política, determina el que no se pueda estar a merced de las reformas de los reglamentos —que permiten el funcionamiento institucional— que venga a producir alteraciones, que requerirían el que tuviéramos que entretenernos mucho más en modificaciones autoorganizativas propias, que en lo que es la resolución de los problemas globales y de interés general para el país, que es realmente la misión de una Cámara legislativa y de representación territorial.

Por tanto, nos parece que, desde el punto de vista de la oportunidad, presentar la reforma parcial del Reglamento del Senado para el tema del debate del estado de las autonomías, es improcedente. Y lo es porque no nos parece correcto que se deba proceder a la reforma parcial del mismo. Es la tercera reforma parcial del Reglamento del Senado que llevamos en un corto período de meses. En todo caso, se podría plantear otro tipo de reformas que habría que estudiar con serenidad, con lentitud, y no a merced de determinadas coyunturas políticas. El Grupo Socialista ha sido y es mayoritario en esta Cámara y en las Cortes Generales durante cuatro años y ha vencido esa tentación, aun con esa mayoría absoluta, precisamente porque considera que al igual que la Constitución, los Estatutos de Autonomía y las Leyes Orgánicas básicas, este tipo de normas requieren un rodaje, un asentamiento y una dinámica que después el curso del tiempo irá viendo por dónde se decanta y por dónde procede o no su modificación y su reforma.

Por tanto, nos parece que no es necesario ni conveniente, con un tema puntual de esta naturaleza, proceder a la reforma del Reglamento del Senado. Esto por lo que se refiere al tema concreto objeto de la modificación de la proposición no de ley.

En cuanto al tema de fondo, que me parece, señorías, que es sin duda alguna el más importante, la segunda razón era, como les decía, el objeto de esta reforma. Evidentemente, toda modificación de una norma pretende conseguir una finalidad, y esta propuesta de modificación tiene un objetivo concreto que es conseguir que haya un debate sobre el estado de las autonomías.

Nos parece que en este momento, señorías, con todos mis respetos, dudar de la existencia de la voluntad política de esta Cámara para la realización de este debate, es cuando menos innecesario. Es innecesario porque en esta Cámara existe, aprobado por unanimidad de todos los grupos políticos presentes en la misma, un plan de trabajo propuesto por el grupo mayoritario, que fue asumido por el resto de los grupos, y que acogió propuestas de los demás grupos de la oposición para que fuera un plan de trabajo que diera cabida a las intervenciones, a las propuestas y a los deseos de todos los grupos parlamentarios.

Como consecuencia de este plan de trabajo, señorías, han comparecido en esta Cámara en un corto período de tiempo —que no se ha podido ampliar porque se nos vinieron encima las elecciones autonómicas y las municipales— nueve Presidentes, entre Presidentes de gobierno y Presidentes de Parlamento, nueve máximas autoridades de las comunidades autónomas. Han comparecido los Presidentes de los Gobiernos asturiano, navarro, de Andalucía, gallego, catalán y vasco, y los Presidentes de tres Parlamentos: Castilla-León, Extremadura y Valencia.

Solamente les recordaría a los señores miembros del Grupo Popular autores de esta propuesta y al señor Bosque Hita, que ha seguido con interés los debates de esta Comisión, cuáles han sido las palabras de los Presidentes de los Gobiernos autonómicos o de los representantes de los Parlamentos autónomos en estas comparecencias ante la Comisión de Autonomías. Todos ellos han felicitado al Senado por esta iniciativa; les ha parecido que era el marco ideal para plantear sus propias preocupaciones y sus propias inquietudes, y en este sentido tengo que decir, y no me duelen ningún tipo de prendas reconocerlo, que se pueden ver por ejemplo, las palabras del Presidente del Gobierno asturiano, por citarles a ustedes un abanico plural, del Presidente del Gobierno gallego, del Presidente del Gobierno vasco, del Presidente del Gobierno catalán. Absolutamente a todos —por referirme a las cuatro fuerzas políticas con representación en las comunidades autónomas— la iniciativa de la Comisión de esta Cámara les ha parecido absolutamente plausible.

Nos parece que ese trabajo que se está llevando a cabo en la Comisión de Autonomías es bueno, y que además tiene el corolario de la intervención del Gobierno de la Nación, porque este plan de trabajo comienza con la comparecencia de dos Ministros, el Ministro para las Administraciones Públicas —que es el responsable de todo el tema de las relaciones comunidades autónomas-Gobierno central— y la del Ministro de Economía, que viene a hablar de todos los problemas que el señor Bosque apuntaba en su intervención, relativos a la financiación de las comunidades autónomas y a la financiación de las corporaciones locales, teniendo la perspectiva, además, de no quedarnos ceñidos a lo que son las relaciones entre Gobierno central y comunidades autónomas, sino de ir avanzando en todo lo que es la articulación entre las distintas Administraciones públicas, las relaciones Gobierno central-comunidades autónomas, comunidades autónomas-corporaciones locales y con las fuerzas políticas presentes en esta comunidad.

Ha habido debates que han puesto de relieve, aparte de los problemas de la Administración, las diferentes concepciones políticas según cual fuera el signo político de una determinada comunidad autónoma o de los grupos parlamentarios existentes en esta Cámara. Es decir, que ha habido un debate de contenido político y de valoración de esas actuaciones.

Ustedes me pueden decir: Muy bien, pero este debate ¿por qué no se hace en el Pleno de esta Cámara? Señorías, este debate se hará en el Pleno de esta Cámara, lo que ocurre es que se debatió en la Comisión de Autono-

mías y nos parece que el trabajo de esta Comisión —SS. SS. lo saben— tiene mucha importancia porque ha traído a la Cámara un debate con todo el contenido, que le da al Senado el auténtico papel de Cámara de representación territorial; papel en el que los socialistas, volvemos a repetir, estamos tan preocupados que hemos sido justamente los proponentes de este plan de trabajo para hacer una especie de chequeo al estado de las autonomías.

Este trabajo de la Comisión de Autonomías no se va a quedar en el seno de ella; ese plan de trabajo de la Comisión será objeto de una o de varias propuestas de la Comisión, con mociones, con enmiendas, y será aquí objeto de un debate con el Gobierno, como fue acordado en el seno de esa Comisión, repito, por todas las fuerzas políticas representadas en esta Cámara. Esta va a ser la base a partir de la cual en esta Cámara habrá un debate que partirá de las conclusiones obtenidas a través de la información suministrada por las comparecencias que se han llevado a cabo.

Me parece, señorías, que la preocupación que podríamos tener como miembros de la Cámara de representación territorial que es el Senado, es saber si vamos a ser capaces de hacer ese debate sobre el estado de las autonomías y de responder al reto que nosotros mismos nos hemos puesto. Luego nos parece que esto se ha centrado bien por parte de esta Cámara, por el Gobierno de la Nación y por los representantes de todas las Comunidades Autónomas; no ha habido ni un solo problema, y el Presidente de la Comisión de Autonomías puede testificar ante SS. SS. que ha habido una respuesta absolutamente positiva al plan de trabajo de esta Cámara por parte de todas las autoridades de las comunidades autónomas. Vamos a proceder a una segunda fase para que vengan también los representantes de los ayuntamientos de diferentes zonas y condiciones, para que nos expliquen cuál es la problemática de la Administración pública territorial.

Todo eso, señorías, tiene tanta importancia que nos parece que tratar ahora de diluir la atención hacia un tema, desde mi punto de vista, absolutamente menor, como es la inclusión del debate de las autonomías en el Reglamento, es innecesario por las razones que apuntaba al principio, por lo que significaba la reforma del Reglamento para nosotros...

El señor PRESIDENTE: Senadora Rubiales, ha transcurrido ampliamente su tiempo.

La señora RUBIALES TORREJON: Señor Presidente, termino en este momento.

Y también desde el punto de vista del propio contenido y del propio objetivo que persiguen los señores del Grupo Popular.

Por otra parte, quiero decirle que existen medios e iniciativas en relación con el Gobierno para que se puedan hacer debates sectoriales en torno al estado y a problemas puntuales de las comunidades autónomas, y que también hay otro tipo de debates, como es el del estado de la Nación, que tampoco está contemplado en el Reglamento del Congreso, y no por eso se produce mejor o peor.

Creemos que lo importante es que haya un debate sobre el estado de las autonomías, y SS. SS. —y ahora sí termino— son absolutamente conscientes, igual que nosotros, de que ese debate se va a celebrar y, además, en las mejores condiciones para todos y para el país.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

¿Algún otro grupo parlamentario quiere tomar la palabra en un turno a favor? (Pausa.)

¿Señores portavoces? (Pausa.)

El señor Bajo tiene la palabra.

El señor BAJO FANLO: Señorías, muy brevemente, quiero manifestar que, en principio, dándose la circunstancia de que no está aquí el representante de nuestro Grupo en la Comisión de Autonomías, queremos tener en cuenta aquellas manifestaciones que en más de un momento nos ha hecho. Concretamente, que se está haciendo un trabajo importante en esta Comisión, y por eso nos parece que quizá el momento más oportuno para realizar cualquier reforma del Reglamento, será una vez que se terminen esos trabajos y se celebre ese debate que, sin lugar a dudas, todos estamos convencidos que se va a celebrar.

Lo que sí pedimos es que esa Comisión trabaje lo más aceleradamente posible y que este debate se pueda llevar a cabo cuanto antes. Y, sobre todo, si es posible, se institucionalice este debate y se celebre todos los años en esta Cámara.

Muchas gracias. (El señor Vicepresidente, Arespacochaga y Felipe, ocupa la Presidencia.)

El señor VICEPRESIDENTE (Arespacochaga y Felipe): Por la Agrupación del Partido Liberal, tiene la palabra el señor López Henares.

El señor LOPEZ HENARES: Señor Presidente, señoras y señores Senadores, la moción del Grupo Popular podría parecer, desde el punto de vista formal, que no es aceptable, puesto que trata de institucionalizar en el artículo del Reglamento un debate que no necesita tal requisito reglamentario.

Sin embargo, nuestro Grupo estima que esta moción es razonable, puesto que yo creo que la propia intervención de la Senadora Amparo Rubiales ha puesto de manifiesto la extraordinaria utilidad que tiene el que esta Cámara, por ser de representación territorial, se ocupe de un problema tan importante como es el de las comunidades autónomas.

Diré más, ayer asistíamos a la celebración del Décimo Aniversario de las Elecciones del año 1977 y con tal motivo se hizo alusión —¡cómo no!— al período constituyente y, en definitiva, a la Constitución.

La Constitución fue objeto de la laboriosa pretensión de conseguir la armonización de posturas contrapuestas para dar solución a múltiples focos de conflicto que tenía nuestro país. Uno de ellos, evidentemente, era el de las autonomías.

No es necesario aludir aquí a la complejidad de este problema para reconocer la respetable aspiración de autogobierno que tenían importantes e históricas regiones de este país.

Pues bien, todos reconocemos que el Título VIII tiene perfiles poco definidos —y es problemático por esta razón—, y su aplicación exige un gran sentido político y probablemente una actualización constante. Por ello se alude con una enorme frecuencia —el Senador Bosque ha hablado de ello— al desarrollo de las autonomías.

Por esta misma razón es por la que yo creo —o creemos todos—, en principio, que este análisis periódico del desarrollo de las autonomías y, por lo tanto, este análisis del estado de las autonomías es conveniente realizarlo en esta Cámara.

La segunda razón es que, como con frecuencia se dice, esta Cámara necesita tener competencias específicas para potenciar la importancia de la misma y darla un significado dentro de nuestro conjunto constitucional. Este es otro motivo por el cual este debate no solamente debe quedar, al menos en este momento histórico, al albur de las decisiones de la Comisión, sino que no está mal que se institucionalice dentro del Reglamento, porque, como muy bien decía la senadora Amparo Rubiales, un Reglamento, y, por tanto, una Ley, tiene una vocación permanente y no es necesario introducir en ella preceptos que parece que, por principio, son temporales. Pero esta misma permanencia exige y conlleva una cierta temporalidad. Con esto, ¿qué quiero decir? Que no sobra tampoco en el Reglamento el que se institucionalice este debate del estado de las autonomías.

Y ya termino. Es bien sabido que esta feliz idea que tuvo el Gobierno socialista de establecer el debate del estado de la nación ha cristalizado ya como una tradición parlamentaria. Efectivamente, el país, la opinión pública, y mucho más la clase política, están pendientes de este debate que tiene una extraordinaria resonancia en el país. Pues bien, todas estas comparecencias tan importantes que hemos tenido aquí, han tenido una cierta, pero no suficiente, trascendencia en la opinión pública.

Creo que este análisis periódico y anual del estado de las autonomías, si se hace en una sesión solemne, aprovechando, bien es cierto, toda esta información obtenida de las comparecencias previas, será un momento tan trascendental como el análisis del estado de la nación.

Por todas estas razones, señor Presidente, señoras y señores Senadores, nosotros vamos a apoyar la moción del Grupo Popular.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Arespacochaga y Felipe): Gracias señor López Henares.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Ruiz de Erenchun.

El señor RUIZ DE ERENCHUN OFICIALDEGUI: Señor Presidente, señoras y señores Senadores, los argumentos de la Senadora Rubiales nos han convencido plenamente, porque entendemos que no es necesario en este momento modificar este artículo del Reglamento.

La voluntad política de celebrar el debate del estado de las autonomías ya quedó plasmada en la legislatura anterior, y así se ha reconocido. Es una voluntad de todos el que el debate del estado de las autonomías se celebre anualmente, y por las mismas razones que ha expuesto la Senadora Rubiales, nosotros entendemos que no hace falta modificar el Reglamento.

Nada más y muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Arespacochaga y Felipe): Muchas gracias, Senador Ruiz de Erenchun.

Por el Grupo de Convergencia i Unió, tiene la palabra el Senador Trias Fargas.

El señor TRIAS I FARGAS: Señor Presidente, muy brevemente quiero decir que nosotros creemos que este debate debe celebrarse con regularidad anual, y esto es algo en lo que todos estamos de acuerdo: a los que venimos de una zona autónoma, porque nos interesa que nuestros problemas se vean, y desde el punto de vista del Senado, porque es una Cámara territorial que recaba competencias, como aquí se ha dicho.

Por otro lado, sabemos que la Mesa tomó el acuerdo de que estos debates se celebraran anualmente. En un discurso del Presidente del Gobierno esto fue ratificado expresamente ante este Pleno. Finalmente, la Comisión de Autonomías está trabajando sobre ello, y creemos que esto puede contribuir a que se celebre este debate, aunque yo quiero recordar que el compromiso es que el debate se pueda celebrar antes de que se acaben los trabajos de la Comisión.

Por todos estos motivos, nosotros nos vamos a abstener en la votación, ya que consideramos que lo que se pretende ya está conseguido en la situación actual.

El señor VICEPRESIDENTE (Arespacochaga y Felipe): Muchas gracias, señor Trias i Fargas.

Por el Grupo Popular, tiene la palabra el Senador don José Alarcón.

El señor ALARCON MOLINA: Gracias, señor Presidente.

Me levanto a fijar la posición del Grupo Popular, y decir que la hemos hecho con plena conciencia de lo que se trataba, ya que el tema es que no queremos tener que darle las gracias al Ejecutivo por venir a celebrar un debate sobre el estado de las autonomías.

A mí me parece que esto es una propina del Gobierno hacia esta Cámara, cuando el Legislativo —y de él formamos parte— tiene posibilidad de hacer un debate a requerimiento del propio Reglamento de la Cámara.

Yo conozco el esfuerzo que se ha hecho desde ese estrado intentando defender a la Comisión. Si todos los Senadores de la Comisión de Autonomías lo han escuchado, pueden dar un aplauso a esa defensa de la Comisión. Aquí no se está hablando de Comisión; se está hablando de Pleno de la Cámara y de una de las funciones lógicamente aceptada por la Constitución, diciendo, además, que el Senado es la Cámara de representación autonómica. (El se-

ñor Presidente ocupa la Presidencia.) Mejor oportunidad que la que tiene esta Cámara para decirle al Gobierno periódica y anualmente cómo se encuentra la situación de las autonomías, no se va a presentar.

Senadora Rubiales —y la señalo sólo una vez—, en esta Cámara, y en la anterior legislatura, en la cual no se encontraba presente, se intentó hacer un debate sobre el estado de las autonomías, pero única y exclusivamente se intentó, y como no estaba reglamentado, el Presidente del Gobierno vino, habló y se marchó, y no pudimos ni siquiera presentar mociones al resto de los miembros del Ejecutivo. Desde luego, eso no se llama debate de las autonomías.

Pero, abundando en esto, el Grupo mayoritario, desde el año 1983, en la anterior legislatura, aquí, en esta Cámara ha estado ofreciendo reiteradamente la posibilidad de hacer un debate sobre el estado de las autonomías. Yo estuve en la anterior legislatura y en ésta, y sigo oyendo —durante casi cinco años— que el debate del estado de las autonomías se debía institucionalizar; hasta el propio Presidente del Gobierno lo ha comentado y lo ha ofrecido.

La Comisión y el plan de trabajo no tienen en absoluto que ver con un debate de las autonomías, porque a la Comisión vienen a informar los señores Presidentes de Autonomías; entonces, dudo mucho que hayan venido a debatir.

En segundo lugar, el Reglamento en estos momentos, en su artículo 32 —y luego hace mención al artículo 43 y al 85—, habla de la creación de grupos territoriales, y resulta que los portavoces de grupos territoriales, que existen aquí, reconocidos por esos artículos, no han hecho ni una sola intervención en un debate sobre el estado de lo que realmente representan: grupo territorial o grupo autonómico. No se ha hecho, en absoluto. Esto quiere decir que están totalmente devaluados los artículos 32 y parte del 43 y del 85. No sé por qué no se tiene que institucionalizar de verdad y con seriedad un debate del estado de las autonomías, cuya petición se viene reiterando desde hace cinco años, y que incluso se ha ofrecido a esta Cámara.

Por tanto, como esto está así, nosotros, desde luego, opinamos que no solamente está bien pedido ese cambio y la mejora de introducir en el Reglamento esa situación periódica, sino que, además, es lo que corresponde a una Cámara de representación de las autonomías.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Alarcón.

Tiene la palabra la señora Rubiales.

La señora RUBIALES TORREJON: Muchas gracias, señor Presidente.

Responderé brevemente, fundamentalmente al portavoz del Grupo Popular. Al resto de los portavoces de los distintos Grupos sólo quiero darles las gracias, en la medida en que hayan podido entender que la portavoz socialista de la Comisión de Autonomías ha hecho una de-

fensa; en este caso estaba tratando de defender el trabajo de una Comisión de esta Cámara y no el de ningún grupo parlamentario.

Trataré de responder al señor Alarcón diciéndole que como él no forma parte de la Comisión de Autonomías, por tanto, no ha entendido el sentido del plan de trabajo de esta Comisión y por eso ha hecho esa intervención; porque justamente el plan de trabajo de la Comisión de Autonomías está hecho para después venir a este Pleno con un trabajo concreto; no es un trabajo de una comisión que se va a quedar reducido al ámbito de esa Comisión. Me parece que ya lo he dicho: está aprobado, tanto por su Grupo como por los restantes; es más —y me parece que lo ha dicho algún portavoz—, el Grupo socialista, el Grupo mayoritario, hizo dejación de montones de principios en el plan de trabajo y al decidir la fecha en la que se debería celebrar el debate, porque nosotros decíamos que el debate se debería celebrar al terminar totalmente el plan de trabajo y, sin embargo, cedimos para que se hiciera antes, como pedía el resto de los portavoces de la oposición.

Luego, señorías, señores del Grupo Popular, ¿se dan ustedes cuenta cómo éste es un tema político y no reglamentario, y de que éste es un tema que realmente de lo que tiene necesidad es de un debate entre las diferentes fuerzas políticas y que hay, por tanto, un deseo del Grupo mayoritario, como no podía ser menos, de que el debate sobre el estado de las autonomías se lleve a cabo en esta Cámara?

Señorías, el debate del estado de las autonomías no es una concesión graciosa, fue una iniciativa del Gobierno socialista. Esa tradición a la que se han referido portavoces de otros Grupos es una tradición que el Gobierno y el Grupo Socialista trajeron a esta Cámara en el año 1985, tampoco hace cinco años, como ha dicho el señor Alarcón. Ha sido el Grupo mayoritario, el Grupo Socialista, repito, el que ha presentado la iniciativa de un plan de trabajo para que entre todos abordáramos en profundidad y con serenidad el debate sobre el estado de las autonomías.

Quiero reiterarles que nos parece innecesaria esta proposición, porque es un tema político y no de funcionamiento, un tema que no se puede resolver ni siquiera con periodicidades anuales buscadas reglamentariamente, porque se pudiera dar el caso de que la situación política de esta Cámara requiera que no fuera el momento precedente de hacerlo cuando estuviera fijado reglamentariamente. Nos parece que cerrarlo con momentos concretos es cerrarnos a nosotros una de las posibilidades más ricas de la democracia, y es la posibilidad del debate político y del acuerdo entre las diferentes fuerzas políticas. Creo que una de las virtudes importantes que ha tenido la Comisión de Autonomías ha sido precisamente conseguir este acuerdo entre todas las fuerzas políticas para que se haga el debate y se fije el contenido de las mismas. Esas comparencias que se han llevado a cabo en dicha Comisión han tenido más valor que si hubieran tenido lugar en el Pleno, pero además, el Pleno de esta Cámara va a tener conocimiento de ese trabajo efectuado.

Por tanto, sigo reiterando que nos parece innecesaria

esta proposición que no viene al caso teniendo un plan de trabajo aprobado que va a venir a este Pleno cuando llegue el momento procedimental oportuno. Agradezco al resto de los Senadores que han mostrado su acuerdo con el Grupo Socialista. Vamos a seguir trabajando para que podamos hacer un debate sobre el estado de las autonomías que esté a la altura del Senado como Cámara de representación territorial.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Vamos a votar si se toma en consideración la propuesta de reforma del Reglamento.

Se inicia la votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 195; a favor, 51; en contra, 133; abstenciones, 11.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Se suspende la sesión hasta mañana a las diez y media.

Eran las veintiuna y cinco.

Imprime RIVADENEYRA, S. A. - MADRID

Cuesta de San Vicente, 28 y 36

Teléfono 247-23-00.-28008 Madrid

Depósito legal: M. 12.580 - 1961